

Julio 20 de 1938

24ª REUNION — 15ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los señores Juan G. Kaiser y Carlos A. Pita

MINISTROS PRESENTES:  
del Interior,  
Doctor Diógenes Taboada  
de Guerra,  
General de brigada don Carlos  
D. Márquez

DIPUTADOS PRESENTES:  
Acuña, Aurelio S.  
Aguirre Cámara, José  
Alsina, Juan José  
Alvarez Colodrero, Carlos  
Alperín, Samuel  
Amadeo y Videla, Daniel (h.)  
Anastasi, Leonidas  
Araujo, Eduardo  
Barceló, Alberto  
Barrau, José  
Barrionuevo, Gerardo  
Basualdo, Honorio  
Beiró, Angel Francisco  
Beristain, Francisco  
Bertotto, José G.  
Biancofiore, Rafael  
Boero, Albino  
Busaniche, Julio A.  
Busignani, Mario  
Cabral, Humberto  
Cafferata, Juan F.  
Cantilo, José Luis  
Cappellini, Luis E.  
Carreras, Ernesto L. de las  
Castex, I. Mario  
Castro Frediani, Manuel L.  
Cisneros, Carlos E.  
Cooke, Juan I.  
Cordero, Octavio  
Courel, Carlos D.  
Damonte Taborda, Raúl  
De Miguel, Benito

Díaz, Raúl  
Dickmann, Enrique  
Espil, Alberto  
Eyto, Francisco F.  
Passi, Santiago Carlos  
Fazio Rojas, Lorenzo  
Figuerola, Julio A.  
Garona, Juan A.  
Ghioldi, Américo  
Godoy, Raúl  
Gómez Grandoli, Clemente  
González, Benjamín S.  
Güerci, José María  
Guerrero, José Rafael  
Guglielmelli, Aquiles M.  
Guillot, Victor Juan  
Güiraldes, Carlos (h.)  
Gutiérrez, José María  
Hardoy, Emilio J.  
Hernández, Clodomiro  
Hernández, Victorio  
Horne, Bernardino  
Infante, Faustino  
Irigoyen, Carlos  
Iriondo, Urbano de  
Izurieta Fourquet, Agustín  
Jaramillo, José María  
Jiménez, Mario  
Kaiser, Juan G.  
Labayen, Juan  
Lazo, Plácido C.  
Lezica Alvear, Florencio  
Lima, Vicente Solano  
López García, Francisco  
López Merino, Ismael  
Maino, Alejandro  
Martínez, Benito E.  
Martínez, F. Benigno  
Martínez, Gregorio N.  
Medina, Justo G.  
Méndez Calzada, Joaquín  
Mihura, Enrique F.  
Montagna, Carlos P.  
Moreno, Ricardo A.

Morrough Bernard, Juan F.  
Mugica, Adolfo  
Muniagurria, Walter Julio  
Noel, Martín  
Onsari, Fabián  
Ortiz de Zárate, Miguel  
Osores Boler, Manuel E.  
Osorio, Miguel  
Pagano, David J.  
Palacio, Benjamín  
Pandoifo, Pío  
Pastor, Reynaldo A.  
Peco, José  
Peña, Ernesto S.  
Pérez, Deolindo  
Piedrabuena, Carmelo P.  
Pinto, Manuel (h.)  
Pita, Carlos A.  
Pizarro, Néstor A.  
Quintana, Fenelón  
Ravignani, Emilio  
Repetto Nicolás  
Reyna, Rodolfo  
Rocha, Justo V.  
Ruggieri, Silvio L.  
Saá, Alberto  
Saccone, Romeo D.  
Sammartino, Ernesto  
Sancerni Giménez, Julián  
Sánchez, Adolfo B.  
Simón Padrós, J.  
Siri, Ovidio F.  
Solana, J. Félix  
Solari, Felipe C.  
Solari, Juan Antonio  
Soldano, Arquímedes A. E.  
Solis, Rogelio J.  
Soto, Pedro Numa  
Susan, José C.  
Tamborini, José P.  
Tapia, Numa  
Teisairo, Eduardo (h.)  
Urien, Enrique César  
Vásquez, Juan Carlos  
Vélez, Francisco M.

Videla Dorna, Daniel  
Vilchez, Martín  
Vilgré La Madrid, Juan  
Zavala Ortiz, Teobaldo

AUSENTES, CON LICENCIA:

Arbeletche, Anibal P.  
Arias Uriburu, Juan  
Critto, Miguel  
Devoto Acosta, Alcibiades  
Ferreira, Antenor R.  
Gómez Rincón, Abel  
Grassi, Alfredo  
Grisolia, Luis  
Lanús, Adolfo  
López, Héctor S.  
Paz, Eduardo  
Paz Posse, Ramón D.  
Prat Gay, Fernando de  
Radio, Pedro  
Sáenz, Mario  
Zara, Edmundo Leopoldo  
Zunino, Marcelo A.

AUSENTE CON AVISO:

Agulla, Juan Carlos  
Astesiano, Carmelo I.  
Schoo Lastra, Dionisio

AUSENTES, SIN AVISO:

Aguilar, Henoch D.  
Boatti, Ernesto C.  
Carús, Agustín J.  
Duffy, Eduardo N.  
Eberlé, Enrique  
Illanes, Eloy J.  
Martínez, Manuel  
Noel, Carlos M.  
O'Reilly, Guillermo R.  
Ortiz Basualdo, Samuel  
Solá, Juan E.

SUMARIO

- 1.—Acta,
- 2.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, auspician-  
do el proyecto de ley sobre adquisición

de muebles, manuscritos y objetos per-  
tenecientes al ex presidente don Domingo  
Faustino Sarmiento.

II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder  
Ejecutivo, sobre ajuste del presupuesto  
general de gastos y cálculo de recursos  
para 1938.

III.—Mensaje del Poder Ejecutivo, acompañando copia legalizada del decreto, por el que se declara día de fiesta en toda la República el 21 del actual, con motivo de la solución del conflicto planteado entre las repúblicas de Bolivia y Paraguay.

IV.—Comunicación de la Presidencia.

- 3.—Homenaje a la memoria del ex diputado nacional don Alfredo Rodríguez.
- 4.—Homenaje a la memoria del ex diputado doctor Adolfo Contte.
- 5.—Sesión de Asamblea.
- 6.—Asuntos entrados:

V.—Comunicaciones oficiales.

VI.—Despachos de comisión.

VII.—Peticiónes particulares.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Pandolfo y otros, acordando un subsidio al Ateneo de Letras y Artes, de Santa Fe.

IX.—Proyecto de ley del señor diputado Eyto, sobre construcción del edificio para la dependencia de Correos y Telégrafos de Baradero (Buenos Aires).

X.—Proyecto de ley del señor diputado Guglielmelli, acordando pensión a la señora María Elena de la Roza de Carignano.

XI.—Proyecto de ley del señor diputado Jiménez y otros, sobre equiparación de sueldo de los médicos de la Policía de la Capital.

XII.—Proyecto de ley del señor diputado López Merino y otros, sobre adquisición del activo físico del Ferrocarril Provincial de Buenos Aires.

XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Peña y otros, sobre prórroga y aumento de la pensión que percibe la señora Rosario S. de Loza e hijas solteras.

XIV.—El señor diputado Cafferata reproduce un proyecto de ley de fomento de la pequeña propiedad rural.

XV.—Proyecto de ley del señor diputado Ravignani, acordando pensión a la señora Carmen García de Carranza.

XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Morrogh Bernard y otros, creando el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de Paraná.

XVII.—El señor diputado Ghioldi reproduce un proyecto de ley, sobre represión del alcoholismo.

XVIII.—El señor diputado Ghioldi reproduce un proyecto de ley, sobre jornada de trabajo para el personal de obreros y empleados de los ferrocarriles nacionales.

XIX.—El señor diputado Ghioldi reproduce un proyecto de ley sobre escalafón del personal administrativo de los ferrocarriles nacionales.

XX.—Proyecto de ley del señor diputado Pastor y otros, por el que se aumenta la pensión que percibe la señora Esther Victoria de Salas Oroño.

XXI.—El señor diputado Jaramillo reproduce un proyecto de ley, sobre oficinas seccionales de irrigación.

XXII.—Proyecto de ley del señor diputado Maino, por el que se acuerda pensión a las señoritas María Esther y María Celio Bello.

XXIII.—Proyecto de ley del señor diputado Videla Dorna, por el que se asciende al grado inmediato superior a los cuatro sobrevivientes guerreros del Paraguay que figuraron en los escalafones de Guerra y Marina.

7.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones, a los señores diputados Radío, Prat Gay, Critto, Lanús, López, Ferreira, Zara, Zunino y Arbeletche.

8.—Proyecto de resolución del señor diputado Sammartino, por el que se piden al Poder Ejecutivo informes por escrito, referentes a créditos adquiridos por el Instituto Movilizador y cuestiones conexas. Queda en suspenso.

9.—Manifestación del señor diputado Pastor, por la que declara que el bloque a que pertenece no va a votar prórrogas de tiempo para la consideración de los proyectos de resolución.

10.—Cuestión de privilegio del señor diputado Saccone, referente a una solicitada que se relaciona con su proyecto de resolución sobre interpelación al señor ministro de Agricultura, respecto a actos de la Junta Nacional del Algodón y cuestiones conexas.

11.—Se considera y aprueba, con modificaciones, el proyecto de resolución registrado bajo el número 8.

12.—Proyecto de resolución del señor diputado Guerrero, sobre investigación por la Comisión de Industrias y Comercio de diversas actividades de la Standard Oil Company. Pasa a comisión.

13.—Proyecto de declaración de los señores diputados Anastasi y Pinto (h.), relacionado con los proyectos de convención aprobados por la Organización Internacional del Trabajo, de 1925 a 1937. Es aprobado.

14.—Moción del señor diputado Godoy, para considerar el despacho sobre concurrencia a la Feria Mundial de Nueva York. Es aprobada.

- 15.—Se considera el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sobre concurrencia a la FERIA MUNDIAL DE NUEVA YORK Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO a celebrarse en 1939.
- 16.—Moción del señor diputado Dickmann, para suspender la consideración del despacho a que se refiere el número anterior y continuar con el de creación de la gendarmería. Es aprobada.
- 17.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Guerra y Marina, en el proyecto de ley sobre gendarmería.

—En Buenos Aires, a veinte días del mes de julio del año 1938, siendo la hora 16:

## 1

## ACTA

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Queda abierta la sesión con la asistencia de 81 señores diputados.

Se va a leer el acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Martínez (F. Benigno) se suprime la lectura del acta, y se da por aprobada.

## 2

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## I

Buenos Aires, julio 13 de 1938.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad auspicando el proyecto de ley que el 21 de agosto de 1935, presentara en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el entonces diputado nacional, doctor Adrián C. Escobar.

El referido proyecto de ley disponía en su artículo 2º una indemnización de \$ 80.000 m/n. a los herederos del ex presidente de la República, don Domingo Faustino Sarmiento, por los muebles, manuscritos, ediciones originales, reliquias, recuerdos, retratos, broncees, mármoles, etcétera, que fueran de su pertenencia y que sus herederos tienen en depósito en el Museo Histórico Nacional.

En fecha próxima, el 11 de septiembre, se cumple el cincuentenario de la muerte del ilustre Sarmiento, sociólogo, educador, periodista, orador, militar, maestro de escuela y presidente de la República, espíritu dota-

do de grandeza moral e intelectual. Siendo un deber de los poderes públicos honrar la memoria de ciudadanos eminentes, y en atención a que la vida y obra fecundas de Sarmiento tienen una significación genuinamente argentinas por su amor a la patria y la pasión que puso en la lucha por la libertad y las instituciones republicanas, con la amplia visión del escenario americano y el concepto de la solidaridad con las naciones amigas, el Poder Ejecutivo proyectó un decreto —dado en acuerdo de ministros— que dispone la organización, en la Capital Federal, del Museo Histórico Sarmiento, creado por la ley número 8.109, para conservar y exhibir los objetos que pertenecieran al ilustre prócer, encomendando su fundación a la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos.

La base de dicho museo la constituyen los objetos depositados en custodia en el Museo Histórico Nacional por los herederos de Sarmiento, y a los efectos de su instalación, el mismo decreto, en su artículo 3º establece que por el Ministerio del Interior se requerirá de la Municipalidad de la Capital la cesión del edificio histórico de pertenencia fiscal, sito en las calles Juncal y Cuba, frente a la plaza de Belgrano, donde funcionara, en 1880, el Honorable Congreso nacional.

Correspondiendo realizar de manera eficaz la recordación argentina y americana de aquel gran educador y estadista, que no sólo fuera un gran pensador sino que también un sembrador de ideas —al par que un maestro de energía y patriotismo— en una forma tal que ejerza influencia en la educación moral del pueblo y la juventud, el Poder Ejecutivo, ante la proximidad de la fecha recordatoria, se permite apoyar decididamente el proyecto de ley que se cita más arriba, con el propósito de que, con la sanción de la misma, la concurrencia al Museo Histórico Sarmiento pueda ser, en lo sucesivo, un acto escolar y público permanente, de indiscutible fuerza evocadora, que las escuelas e instituciones podrán realizar a diario.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ROBERTO M. ORTIZ.  
Jorge E. Coll.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

## II

Buenos Aires, julio 20 de 1938.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra honorabilidad en cumplimiento del artículo 81 de la ley número 12.360, el proyecto de ajuste del presupuesto general para el corriente ejercicio. No le ha sido posible remitirlo en el plazo fijado por vuestra honorabilidad, es decir, durante el mes de mayo próximo pasado, por las dificultades con que tropezó a raíz de la sanción tardía de la ley de presupuesto y la estructura especial con que ésta fué aprobada.

La primera dificultad que debió ser resuelta por el Poder Ejecutivo y que consistió en la necesidad de arbitrar los medios que asegurasen el normal funcionamiento de los servicios a cargo de la Nación y el pago puntual de los sueldos de los servidores del Estado y de los gastos de la administración pública, fué sayada satisfactoriamente. Para ello se tuvo que recurrir al sistema de anticipos mensuales, pero si bien este procedimiento facilitó el desenvolvimiento de la administración, recargó, en cambio, considerablemente

hay que trabajar con vistas a un futuro mediano y en ningún caso abandonar la acción porque no existan posibilidades inmediatas. Colocar productos argentinos, en Estados Unidos, evidentemente no es fácil, porque nuestra producción es muy semejante a la de aquel país. Pero hay, y se seguirán produciendo, rendijas por donde filtrarse. En febrero del año pasado, el señor García Mata, por esa época en Nueva York, formulaba sugerencias interesantes sobre la posibilidad de aprovechar con este criterio las exposiciones de Nueva York y San Francisco. García Mata es un funcionario del Ministerio de Agricultura, y dice a este respecto, que el éxito de nuestras carnes en la Exposición de París era una experiencia que debía aprovecharse ahora. Las exposiciones de Nueva York y de San Francisco van a servir para tentar la posibilidad de aumentar la venta de carne conservada argentina en Estados Unidos. Lo mismo puede ocurrir, siempre a estar al informe del mismo señor García Mata, con la yerba mate.

Y bien, señor presidente. En las exposiciones de Nueva York y San Francisco la Argentina podrá hacer una propaganda eficaz sobre sus carnes conservadas, sobre la yerba mate, sobre sus frutas y vinos. La oportunidad va a ser excepcional. El Instituto de Distribución de Alimentos de Nueva York opina que en estas exposiciones el consumo va a ser el doble de la Exposición Internacional de Chicago. En esta exposición se consumieron 8.000.000 de *sandwiches* de carne conservada, prensada y picada; 8.000.000 de *sandwiches* de pan francés; 8.000.000 de botellas de bebidas sin alcohol; 4.500.000 paquetes de maíz reventado y 10.000.000 de botellas de cerveza. En síntesis, la República Argentina no puede estar ausente de las exposiciones de San Francisco y de Nueva York, en primer término porque ocupa un lugar en el concierto de las naciones civilizadas, y debe hacer honor a ello, y en segundo lugar porque está en el deber de agrandar su prestigio en el mundo. Por último, porque debe ir a Nueva York y a San Francisco a probar la bondad de sus productos, en ese mercado.

En las exposiciones de Nueva York y San Francisco podremos repartir yerba gratis en toda forma y muestras de carnes conservadas y de vinos, y es posible ocurra lo mismo con las frutas. El país no puede, entonces, negarse al sacrificio financiero que implica el gasto de la representación argentina en estas dos grandes exposiciones, porque es un sacrificio que volverá en beneficio del país.

16

## MOCION

**Sr. Dickmann.** — Pido la palabra, para una moción previa.

El proyecto de ley que está a consideración de la Cámara tiene una disidencia de los señores diputados radicales que la habrán de fundar con extensión; y yo, que firmo el despacho de la mayoría, tendré también que fundar mi voto con cierta extensión, y estando los señores ministros en el recinto, propongo que se pase a la orden del día, e inmediatamente de sancionarse el proyecto sobre gendarmería, se continuaría con el asunto que estamos tratando ahora.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — En consideración la moción de pasar a la orden del día.

**Sr. Saccone.** — Pido la palabra.

Hemos votado la moción del señor diputado Godoy, en la creencia de que los señores ministros estaban en la Casa Rosada; pero, estando aquí, sería poca cortesía parlamentaria tratar un asunto ajeno a aquel que motiva la presencia de los señores representantes del Poder Ejecutivo. Por eso apoyo que se pase a la orden del día de inmediato.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se va a votar la moción de aplazamiento formulada por el señor diputado por la Capital.

— Resulta afirmativa.

17

## GENDARMERIA NACIONAL

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Quedó pendiente de votación en general el despacho sobre creación de la gendarmería nacional.

**Sr. Solari (J. A.).** — Propongo que la votación sea nominal.

**Sr. López Merino.** — Pido la palabra.

La circunstancia de que compañeros de representación adoptaran una posición distinta con respecto a este proyecto de ley, me obliga a fundar brevemente mi voto sobre el mismo.

Voy a votar en contra del proyecto de ley de gendarmería nacional y lo voy a hacer por varias razones. La primera porque estimo que vamos a sancionar una ley que va en contra de la esencia misma de nuestro federalismo, base de las instituciones que nos rigen y que no es posible que representantes legítimos de las autonomías provinciales podamos dar nuestro voto al inciso b), del artículo 3º, que faculta

al Poder Ejecutivo nacional, en circunstancias no determinadas, a intervenir de hecho las provincias al margen de las garantías establecidas en los artículos 5º y 6º de la Constitución nacional.

Esta disposición que va a incorporarse a la ley es eminentemente inconstitucional, porque invade el campo de las facultades no delegadas por las provincias al constituir la organización federal que nos rige.

No voy a entrar, porque no es el momento y ya se hará en la discusión en particular, al detalle y análisis de estas circunstancias. Además, mi voto no es improvisado. He pertenecido durante dos años a la Comisión de Territorios Nacionales, animada por el espíritu noble y generoso del ex diputado Buirá, quien, con gran cariño, se había compenetrado de todos los problemas de los territorios y era así que diariamente llegaban representantes de las fuerzas vivas de todas las actividades de los territorios nacionales y requerido cada uno de ellos sobre su opinión con respecto al proyecto de gendarmería, afirmo bajo mi fe de diputado de la Nación, que ni una sola opinión era favorable al proyecto de ley de gendarmería.

Además nos encontramos en mora con respecto al cumplimiento de la ley número 1.532, del año 1884. Cuando la fundara hace 56 años el entonces diputado Ramón J. Cárcano, dijo más o menos las siguientes palabras, que no resultaron proféticas: «Al sancionar esta ley seguimos el ejemplo de Estados Unidos en la ley, y lo continuaremos siguiendo en sus progresos». Hemos seguido, por cierto, el ejemplo en la ley, pero no lo hemos seguido en sus progresos. De los trece Estados que en 1789 constituyeron la base inicial de Estados Unidos, hoy son cuarenta y ocho los que forman la gran nación del Norte. Se ha cuadruplicado el número de Estados federales y, en cambio, en los 85 años de sancionada nuestra Constitución federal, no ha aumentado uno solo de los Estados iniciales. Las 14 provincias de 1853 son las 14 provincias de 1938.

La superficie total ocupada por las provincias es de 1.580.000 kilómetros cuadrados y la de los territorios importa una cantidad casi equivalente de 1.400.000 kilómetros cuadrados, con una población que se aproxima al millón de habitantes, a quienes el resto del país mantiene alejados del ejercicio de los derechos cívicos y de ciudadanía.

Hay provincias que reciben de la Nación — y esto no es un cargo — muchos mayores bene-

ficios económicos y financieros que los que ellas aportan y esas provincias, con un espíritu de justicia, deben por lo menos hacer llegar los beneficios de la libertad a aquellos territorios que contribuyeron con su esfuerzo a aportar a la Nación mucho más que lo que la Nación les otorga.

El día 16 de julio, —y ya que está de moda leer editoriales, voy a seguirla— el 16 de julio en un diario de la tarde de gran gravitación moral en el pueblo, cuya fina sensibilidad sabe reconocer que la pluma de sus redactores jamás estuvo en venta en el mercado de la venalidad, ni jamás se puso al servicio de intereses mezquinos, el diario «Pregón» de reciente aparición, dice lo siguiente:

«Justamente cuando en varios territorios nacionales se ha iniciado una campaña en favor de la provincialización de los mismos, y cuando toda la opinión pública del país parece volcarse en apoyo de esa campaña, la Cámara de Diputados de la Nación —en donde los territorios no tienen representantes— se ha empezado a discutir el proyecto sobre creación de un cuerpo de gendarmería federal destinado a actuar, bajo la dirección inmediata del Poder Ejecutivo nacional, en las mencionadas gobernaciones. Nada más inoportuno que ese proyecto, entonces, ya que, de ser aprobado, creará un nuevo vínculo de sumisión de los territorios al gobierno central, cuando precisamente lo que se busca en estos momentos es que los vínculos ya existentes sean dejados sin efecto.

Y termina:

«La gendarmería será resistida en los territorios; así como el ejército ha sido recibido jubilosamente, esta gendarmería no será aceptada, no por los hombres que la formen, sino por el espíritu de que va animada; porque significa acrecentar el trato colonial que hasta hoy se les dió a los territorios; porque tiene atribuciones que le dan jerarquía sobre el pueblo y sobre las autoridades de los lugares en que actuará; porque no tendrá el carácter local que deben tener todas las autoridades, y porque su presencia en los territorios será el símbolo de una dominación de la que esos territorios quieren liberarse».

Señor presidente: El problema de los territorios nacionales no es un problema policial, es un problema institucional. Cumplamos con la ley, elevemos a la categoría de provincias a aquellos territorios que se encuentran en condiciones, y desde ya puedo anticipar que en breve, con mi compañero de representación el

doctor Solana, presentaremos un proyecto de provincialización de los territorios de La Pampa, Río Negro, Chaco y Misiones. Sancionemos esos proyectos en su oportunidad y habremos llenado dos misiones: habremos cumplido en primer término, nuestro deber con los territorios nacionales y habremos, también, realizado la noble misión de engrandecer a la patria y a la Nación dentro de los límites de la Nación misma.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Presidente (Kaiser).** — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyada la indicación de que la votación sea nominal.

—Resulta suficientemente apoyada.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se tomará la votación nominalmente.

**Sr. Guglielmelli.** — Podríamos utilizar la votación mecánica.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — La Presidencia necesitaría estar autorizada por la Honorable Cámara para tomar la votación mecánica.

**Sr. Lazo.** — Creo que la votación mecánica va a dar lugar a confusiones. Muchos señores diputados no tienen la llave. Además, debe haber una resolución previa de la Cámara para ello. Considero, entonces, que debe tomarse la votación nominal como hasta ahora.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se tomará la votación nominal en la forma usual.

—Practicada la votación nominal:

**Sr. Prosecretario (Madero).** — Han votado 80 señores diputados por la afirmativa y 17 por la negativa, en la siguiente forma:

—Por la afirmativa, los señores diputados: Acuña, Aguirre Cámara, Alvarez Colodrero, Allperín, Amadeo y Videla (h.), Araujo, Barceló, Barrau, Barrionuevo, Basualdo, Beristain, Biancofiore, Busignani, Cafferata, Cantilo, de las Carreras, Cuntex, Cooke, Castro Frediani, Cordero, Courcel, Damonte Taborda, De Miguel, Díaz, Espil, Fassi, Fazio Rojas, Figueroa, Godoy, González, Güerci, Guerrero, Guglielmelli, Güiraldes, Gutiérrez, Hardoy, Hernández (V.), Infante, Iriondo, Izurieta Fourquet, Jaramillo, Labayen, Lazo, Lima, López García, Martínez (B. E.), Medina, Mihura, Moreno, Morrogh Bernard, Mugica, Muniagurria, Onsari, Ortiz de Zárate, Osorio, Palacio, Pandolfo, Pastor, Pérez, Pita, Pizarro, Quintana, Ravignani, Reyna, Rocha, Sancerri Giménez,

Sánchez, Simón Padrós, Solari (F. C.), Soldano, Solís, Susan, Tamborini, Tapia, Urien, Vélez, Videla Dorna, Vilchez, Vilgré La Madrid y Soto.

—Por la negativa, los señores diputados: Aguiar, Anastasi, Cisneros, Dickmann, Eyto, Ghioldi, Gómez Grandoli, López Merino, Maino, Piedrabuena, Pagano, Repetto, Ruggeri, Sammartino, Solana, Solari (J. A.) y Teisaire.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se va a votar en particular.

En consideración el artículo 1º.

**Sr. Solana.** — Pido la palabra.

Acaba de votarse, en general, la ley de creación de la gendarmería nacional, indudablemente una de las leyes más importantes sancionadas en los últimos tiempos.

Al entrar ahora a la discusión en particular, entiendo que debemos dedicar un análisis detenido al artículo 1º, porque a mi juicio, es el más importante de todos los artículos, ya que en él se engendra esta organización, aquí se conforma lo principal en todo organismo con vida: el espíritu que lo anima. Este artículo dice textualmente: «Créase la gendarmería nacional con carácter de policía militarizada federal, sin que esto importe considerarla como parte integrante del ejército de la Nación, del cual es independiente». Se deduce, pues, que esta ley crea un cuerpo de policía, y nada más que un cuerpo de policía, sólo militarizado a los efectos de la disciplina, como se ratifica en los artículos subsiguientes.

Entiendo que debe sentarse bien este concepto. Al crearse el cuerpo de policía, el Parlamento procede nada más que como legislatura local; crea un cuerpo de policía para los territorios nacionales y para la Capital Federal. Este es un primer punto de vista que queda perfectamente establecido.

Hay otro punto de vista interesante. Será éste un organismo civil y, por lo tanto, cualquiera que sea el régimen de disciplina interno a que se lo someta, sus componentes no podrán ser sacados del fuero civil.

Señor presidente: Cuando se trató en general este proyecto, lo impugné por inconstitucional. Fundé mi impugnación en el artículo 1º, claro, preciso y terminante, que no permite que los componentes de esta organización, a los cuales la ley los abraza y los bautiza en el fuero civil, sean sometidos —como se hace en un artículo siguiente— al Código de Justicia Militar, ley de excepción, fuero de excepción, que sólo al-

canza a los militares. Yo observo con satisfacción que aquella impugnación que hice en el debate en general, se ha abierto camino; y señores diputados que tienen autoridad en la materia, advertidos, entiendo que fundarán, al tratarse los artículos siguientes, este mismo punto de vista.

Me interesaba dejar sentados, al ponerse a consideración de la Honorable Cámara, el artículo 1º, estos dos conceptos elementales y fundamentales: primero, que se crea un cuerpo de policía; y, segundo, que se crea un cuerpo de policía civil, porque alrededor de estas dos afirmaciones tendrán que girar posteriormente todos los artículos de la ley.

Nada más.

**Sr. Pizarro.** — Pido la palabra.

La observación formulada por el señor diputado que acaba de hacer uso de la palabra es exacta. Cuando en el artículo 1º se dice «créase la gendarmería nacional con el carácter de policía militarizada», se crea la institución y se define cuál es el género próximo y cuál la última diferencia que la diversifica de las otras clases de policía que existen o que puedan existir en el territorio del país, sean ellas de carácter federal o sean ellas de carácter local o estatal.

La palabra «militarizada» es la que califica y, yo diría más, substantiviza el concepto general de la policía. Podríamos decir, al revés, «créase un ejército policial, o una división de ejército policial». Esta palabra perturba en el concepto interno de nuestro derecho político, y perturba en el concepto del derecho público internacional. En cuanto al derecho interno, he hecho referencia en la sesión pasada al alcance que correspondería a todas las leyes de creación o reclutamiento de tropa, cuya iniciativa es privativa de esta Cámara. He hecho referencia también a que el poder de policía es privativo y exclusivo de los gobiernos de los Estados, salvo en los territorios federales, donde le corresponde directamente al Poder Ejecutivo nacional. Pero hay algo más. Está también en contra de nuestra ley orgánica de los ministerios nacionales, por cuanto por la misma ley de división de las atribuciones de los ministerios, se asigna al Ministerio del Interior exclusivamente la parte política y al Ministerio de Guerra privativamente todo lo que atañe a las fuerzas armadas. Está también en contra del espíritu general que anima hoy en día la reforma y el régimen de la organización armada de la República cuando se habla de un ministerio único de defensa nacional. Vale decir, que

nosotros creamos una fuerza militarizada que está dependiendo de dos organismos de Estado totalmente distintos en sus atribuciones y funciones.

Y yo me preguntaría qué característica tiene dentro del derecho público internacional esta nueva fuerza de policía que se crea para actuar en el territorio de la República, y cómo serían consideradas por las otras fuerzas permanentes y regulares de la Nación. ¿Se consideraría, a pesar de lo que decimos en el articulado, como parte integrante de esas tropas regulares, o no?

Puedo asegurar a la Honorable Cámara que por las reglas generales que rigen la organización de las tropas regulares de los países, de acuerdo a convenciones, a leyes, a usos y costumbres, estas tropas serían consideradas como tropas regulares de acción. Entonces, para encuadrar el problema dentro de los términos exactos que la organización a crearse requiere y dentro de lo que en la sesión pasada el propio ministro de Guerra ha reconocido, que tiene carácter de policía, yo propondría una reforma en estos términos: «Créase la gendarmería nacional con el carácter de policía federal».

En esta forma resolvería totalmente el problema.

Ahora, si fuera necesario entrar al fondo del asunto, yo podría presentar a la Cámara, porque los tengo en mi banca, los antecedentes de la legislación de diversos países sobre esta materia, que le asignan el carácter de tropa regular.

Desde ya, puedo decir que en Canadá la policía montada tiene características de fuerza regular. En Chile, los carabineros tienen también ese carácter. Los autores de derecho público internacional le asignan a las fuerzas de esta naturaleza —cuando están sujetas a un comando militar y a la jurisdicción militar, y cuando reúnen los requisitos y tienen finalidades militares directa o indirectamente enunciadas— el carácter de las tropas militares. Tengo también los antecedentes que se refieren a la organización, en el Brasil, de la policía militar del distrito federal.

Tengo la reglamentación de Francia respecto a la gendarmería en su cuádruple aspecto, departamental, en lo referente a la situación de la ciudad de París, en el orden colonial y finalmente en lo que respecta a la gendarmería movable.

Tengo los antecedentes de Italia sobre el cuerpo de carabineros, como igualmente de Estados Unidos, la gran democracia del Norte, donde los autores dicen —y el anuario militar

de la Sociedad de las Naciones lo declara — que no existe policía federal y no hay control alguno de esta naturaleza.

Esta organización, que no es nueva, que tiene su origen en el año 1814, según consta en el Digesto Italiano. V.—Agente de la fuerza pública, página 520, en antecedentes que oportunamente podrá presentar a la Cámara, posteriormente fué tomada en Toscana y Nápoles, copiada luego por Austria y por Prusia, los países más militarizados y mejor organizados en sus instituciones de este género.

Yo propongo, para no entrar en el estudio a fondo de este asunto, la modificación del artículo en los términos que he expresado. Si la comisión acepta, me excusaré de mayores comentarios.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — ¿La comisión acepta?

**Sr. Vélez.** — Pido la palabra.

**Sr. Repetto.** — Pido la palabra.

Para proponer al señor diputado una nueva redacción de la proposición, que sería la siguiente: «Créase la gendarmería de los territorios nacionales con el carácter de policía militarizada».

**Sr. Presidente (Kaiser).** — ¿Si me permite el señor diputado? Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

**Sr. Vélez.** — Estimo que no hay en la redacción del artículo 1º, los inconvenientes que se han creído ver.

Gendarmería militarizada llama la ley a este cuerpo especial que tendrá un doble carácter: militar en cuanto a su organización, instrucción, disciplina y, en cuanto a la manera de proceder con respecto a los individuos que lo constituirán; y policial, en cuanto al servicio que va a desempeñar.

No veo, pues, los graves inconvenientes que se cree descubrir en este doble carácter. Se le da carácter militar a los efectos de su organización y disciplina y al asignarse el fuero militar para juzgar los delitos que el personal pueda cometer, se hace para asegurar la mayor garantía para las mismas poblaciones. Se establece así, un régimen severísimo porque los componentes de este cuerpo deberán actuar muchas veces aisladamente, lejos de sus jefes, y es necesario que cada individuo tenga la conciencia de la gravedad del delito que cometería faltando a sus deberes. He ahí por qué se le llama militarizada.

Y al decirse en la ley que es una policía, es porque va a estar encargada de este servicio civil en cuanto a la manera de desempeñarlo.

Se anota, también, una dificultad grande por la aplicación del Código Militar para el personal y la aplicación del Código Penal para las faltas que pudieran cometer los civiles, tal como son considerados en el orden general de la policía. Las dos cosas no son incongruentes sino que son complementarias y el criterio que ha regido en la redacción del artículo no es otro que el de dar una designación general señalando, desde el primer momento, que se trata de crear una unidad que ha de responder a una necesidad general y cuyas características especiales se establecen en el cuerpo mismo de la ley.

**Sr. Solana.** — El espíritu del cuerpo está en el artículo 1º, que es una definición.

**Sr. Videla Dorna.** — Es a lo que se está refiriendo el señor diputado.

**Sr. Guglielmelli.** — Se está adelantando la discusión.

**Sr. Vélez.** — Se ha observado que se va a sacar a los individuos de su fuero y que la ley va a asumir un carácter inconstitucional. No lo pienso así, porque una ley modifica a otra ley. Y si esta ley crea un fuero especial para este cuerpo, será el que ha de regir para él.

**Sr. Piedrabuena.** — Debe recordar el señor diputado que se ha cuestionado la constitucionalidad del Código de Justicia Militar, de manera que si se declara en este caso, que no se trata del ejército permanente, mal puede aplicarse el Código de Justicia Militar.

**Sr. Guglielmelli.** — No es el momento de tratar esta cuestión.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Sería conveniente para el orden del debate, que se respetara en el uso de la palabra al señor diputado por Salta.

**Sr. Vélez.** — En consecuencia, la comisión sostiene el artículo en los términos en que está redactado.

**Sr. Repetto.** — Pido la palabra.

Deseaba, justamente, hablar antes de que hiciera su manifestación el señor miembro informante, porque iba a proponer una modificación al artículo 1º.

Hemos votado en contra de este proyecto de ley, pero como la Cámara lo ha aprobado en general y seguramente lo llevará adelante, estamos ahora en la obligación de contribuir a mejorarlo en lo posible, dentro de nuestro punto de vista.

Propongo que a continuación de la palabra «gendarmería» se agregue: «de los territorios nacionales», y dejar lo demás como está. Quiero en esta forma, que en el primer artículo figure una constancia clarísima de que la fuerza



que se crea por esta ley, sea una policía militarizada o una organización militar de carácter policial, tenga un destino o aplicación reservados estrictamente a los territorios nacionales, porque en todo este proyecto no se ve claro que esta fuerza no pueda operar alguna vez en la Capital Federal; del proyecto se desprende que puede operar hasta en la Capital Federal, y aun en las provincias en los casos previstos por la misma. Yo propongo, pues, que el artículo 1º se redacte así: «Créase la gendarmería de los territorios nacionales...» Creo que ése es el pensamiento de la Cámara y también del gobierno.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Oportunamente señor diputado, no habiendo aceptado la comisión ninguna modificación se someterá a la votación de la Honorable Cámara.

**Sr. Repetto.** — El miembro informante de la comisión no conocía mi proposición y no ha podido asegurar que no la aceptaba; salvo que esté ya dispuesto a rechazar cualquier modificación que se proponga.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Así lo entendió la Presidencia; pero someterá a votación la proposición del señor diputado, después de la votación del artículo propuesto por la comisión.

**Sr. Ravignani.** — Voy apoyar la indicación del señor diputado por la Capital en el sentido de que se agregue en el artículo 1º de la ley, que esta policía militarizada lo sea para ejercer funciones, exclusivamente, en los territorios nacionales. Cuando se fundó el proyecto se invocaron las necesidades de esos territorios. Entiendo que si queremos ser consecuentes y lógicos con los fundamentos generales dados en la discusión, el agregado del señor diputado por la Capital es lo que cuadra.

No quiero adelantar las razones ahora de por qué a pesar de haber votado el proyecto en general me voy a oponer al artículo 3º, pero precisamente el agregado que acaba de proponer el señor diputado Repetto vendría a limpiar, a mi juicio, las serias objeciones que hay que hacer al artículo 3º del proyecto en discusión y, además, creo que la Cámara, lealmente, votaría un proyecto de ley creado con el único y exclusivo destino de asegurar nuestra soberanía y el orden en los territorios nacionales desamparados.

**Sr. Cooke.** — Pido la palabra.

Acepto el agregado propuesto por el señor diputado Repetto y que acaba de apoyar el señor diputado Ravignani; pero este artículo, ya sea en la redacción nueva que se propone, o en su redacción anterior, no podría ser votado sin

que la Cámara aclarara brevemente algunos conceptos, porque como lo ha expresado el señor diputado Solana, en este artículo 1º está el espíritu de la ley.

Que la gendarmería no es parte integrante del ejército resulta del artículo 1º mismo que lo establece expresamente y del artículo 6º, segunda parte, a *contrario sensu*, cuando dice que solamente en caso de guerra se considerará parte integrante de la reserva del ejército. Resulta, también, de la exposición de los miembros informantes, de las palabras del señor ministro del Interior cuando exponía que esta gendarmería tendrá el carácter de policía militarizada, sin que tal circunstancia implique que ella formará parte integrante del ejército, y de las palabras del señor ministro de Guerra cuando nos decía que el ejército no busca ni quiere tener un aumento de esta clase, pues las actividades y la misión a asignar a esta gendarmería divergen fundamentalmente de sus funciones.

Si la gendarmería constituyera un aumento del ejército, la iniciativa de esta ley le hubiera correspondido, por razón del privilegio constitucional, a la Cámara de Diputados. De cualquier manera, hubiera sido mejor, quizá, que la ley hubiera venido primero a la Cámara de Diputados desde que, en última instancia, esta policía será parte integrante del ejército en caso de guerra, lo que implica en cierta manera un reclutamiento de tropas que sólo puede promover este cuerpo.

Si la gendarmería no es parte integrante del ejército, sus miembros no tienen «estado militar». Y conviene analizar esta cuestión del «estado militar» para que nos pongamos de acuerdo sobre lo que significa, por las contradicciones que hay entre diversos artículos de esta ley.

En un concepto general, «estado militar» es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los militares. La ley número 4.856 dice en el artículo 16, capítulo III: «Estado militar. — El grado de cada oficial, las obligaciones y derechos que le son inherentes, constituyen el estado militar»; el 17 dice que las obligaciones que impone el estado militar a todas las jerarquías están determinadas por los códigos y leyes militares en ejercicio, por los decretos del Poder Ejecutivo y por las ordenanzas generales de la armada; el 18 define cuáles son los derechos del estado militar, y el 19 establece cómo se pierde el estado militar.

Por el proyecto resulta que los miembros de la gendarmería no tienen «estado militar», según el artículo 1º, cuando dice que no forma

parte integrante del ejército de la Nación; por el artículo 4º que la coloca bajo la dependencia del Ministerio del Interior —porque no se concibe que una parte del ejército esté bajo la dependencia de un ministerio que no sea el de Guerra—, y por el artículo 16 que establece expresamente que el personal de la gendarmería nacional no tiene «estado militar».

Por el mismo proyecto resulta que la gendarmería tiene «estado militar», pues el artículo 16 dice que el personal de la gendarmería nacional no tiene estado militar, *sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º de la presente ley*, y el artículo 7º dispone que en lo que se relaciona con su instrucción, su personal será sometido a las leyes y reglamentos establecidos para el ejército, y en lo relativo a la disciplina está sometido también al régimen del ejército y comprendidos dentro del Código de Justicia Militar.

¿En qué quedamos? ¿Tienen estado militar o no tienen estado militar? Afirmo que tienen «estado militar» desde el momento que su organización y su disciplina están sometidas a las leyes militares.

Hay una serie más de incongruencias en el proyecto, por lo que conviene establecer claramente qué es esto del «estado militar».

Por lo pronto, es evidente que este proyecto está empeorado en la parte que se refiere al «estado militar» con relación al primitivo proyecto que suscribió el ministro Matienzo y posteriormente el ex ministro y actual diputado doctor Tamborini, porque en la orden del día número 88 del año 1926, figura este mismo proyecto con leves modificaciones y en la parte relativa a bajas dice: «si el personal de baja tuviera «estado militar»... etcétera. Es decir, en ese proyecto se preveía que hubiera personal con «estado militar» y personal sin «estado militar».

**Sr. Vélez.** — ¿Si me permite el señor diputado?

**Sr. Cooke.** — Con mucho gusto.

**Sr. Vélez.** — En efecto, en este caso ocurrirá lo mismo, porque como se toma personal del ejército y como se toma también personal retirado que a pesar de su situación de retiro conserva el «estado militar», al dársele de baja en la gendarmería tendrán estado militar.

**Sr. Cooke.** — Ahora en el artículo del actual despacho que se refiere a las bajas —y que motivó un argumento interesante del señor diputado Solari respecto a estos miembros de la gendarmería que estarán sujetos a una doble jurisdicción y competencia—, se dice: «Si se

diera de baja en estas condiciones a oficiales del ejército»... etcétera. No habla de oficiales que tuvieran o no estado militar.

Indudablemente, en la gendarmería va a haber personal con estado militar: en primer lugar, su jefe va a ser un teniente coronel en actividad —cuyos servicios se considerarán como prestados en el ejército—, y va a haber también esos oficiales que de acuerdo con el artículo 52 del despacho van a prestar servicios en comisión por un plazo que no exceda de 18 meses.

De manera que tenemos en este proyecto esta triple situación: artículos que establecen categóricamente que el personal no tiene «estado militar», artículos que establecen que tienen «estado militar», y una interpretación que puede llamarse auténtica, del presidente de la comisión, que nos acaba de decir que los retirados del ejército que pasarán a la gendarmería continuarán teniendo estado militar, lo que ya es completamente discutible, pues ha motivado fallos de la Suprema Corte con respecto a la situación de esos retirados en relación al Código de Justicia Militar.

Hay que considerar, por otra parte, que se trata de una fuerza policial militarizada que tendrá que cumplir órdenes de funcionarios civiles, y no se puede aceptar que esos militares continúen en la gendarmería con su estado militar. Sería una contradicción.

Mi opinión no es improvisada ni exclusiva, porque ha sido también un juicio de «La Prensa», citado por el señor diputado Solari. El estado militar atribuido a esta fuerza policial es un contrasentido, por no calificarlo de otra manera.

No quiero anticipar la discusión sobre la procedencia de la aplicación del Código de Justicia Militar al personal de esta gendarmería, lo que será motivo de consideración al tratarse los artículos 7º y 8º.

Deseo dejar sentado, ahora, aceptando el agregado del señor diputado Repetto, que los términos «policía militarizada» que van a quedar en este artículo, ya sea que se acepte o no la redacción propuesta, única y exclusivamente pueden significar que en cuanto a la instrucción, organización y táctica será policía militarizada; pero no se puede aceptar que votado este artículo se considere al personal de la gendarmería —que no tiene «estado militar», como lo dice el artículo 16 y que no forma parte del ejército, según expresa el artículo 1º— sometido al Código de Justicia Mi-

litar, lo que equivaldría a establecer que tiene «estado militar».

**Sr. Susan.** — Pido la palabra.

Al informar en general este despacho, dejé establecido que algunos de los miembros de la Comisión de Guerra y Marina lo habían firmado al objeto de no poner inconveniente ninguno a la sanción de la ley, que creemos sinceramente necesaria. Expresé también en aquella ocasión, que considerábamos este despacho como un instrumento con posibilidades de mejoras, que la experiencia y conocimientos de los señores legisladores podrían, quizá, introducirlos en el momento de la discusión en particular.

Aunque la Comisión de Guerra y Marina resolvió mantener este despacho íntegramente, con miras de no introducir modificaciones a fin de que sea de inmediato convertido en ley, algunos de los miembros de esa comisión pertenecientes a mi sector —mi colega el señor diputado Castex y el que habla— consideramos en este momento que la proposición del señor diputado Repetto, de agregar las palabras «para los territorios nacionales», es conveniente porque establecerá terminantemente el carácter, alcance y finalidad de la ley.

Cuando se estudió este proyecto hemos recalcado siempre que es principalmente para los territorios nacionales, que son los que necesitan de esta gendarmería para resguardo de sus habitantes y seguridad de sus intereses. Con el agregado propuesto, el fin de esta ley aparecería perfectamente claro, en nuestro entender, y por ello lo vamos a votar.

**Sr. Videla Dorna.** — Pido la palabra.

Voy a hacer algunas breves consideraciones referentes a este artículo 1º.

Desde luego, es necesario tener presente que al considerar este proyecto de ley es conveniente seguir la correlación que guarda su articulado. Los escrúpulos que han movido al señor diputado por la Capital a proponer su agregado, no tienen fundamento.

El artículo 14 del despacho establece con respecto a su organización en qué forma se van a establecer los comandos y las unidades de la gendarmería. Y allí queda expresamente determinado en tres apartados, el a), b) y c), los lugares donde se va a organizar la gendarmería.

**Sr. Solari (J. A.).** — El inciso b) del artículo 3º hecha por tierra toda esa organización, que es simplemente administrativa, o táctica, si quiere el señor diputado.

**Sr. Videla Dorna.** — Voy a continuar.

Más adelante, en el capítulo VI, artículo 46,

en lo que pueda referirse a la radicación de las funciones de la gendarmería, se establece en forma bien clara dónde van a estar las fracciones de tierra que se tomarán en cuenta para ese aspecto de colonización contemplado en la ley.

Creo, señor presidente, que esto aleja esos escrúpulos y hace innecesario agregar nada al texto del artículo 1º.

**Sr. Ruggieri.** — La definición la da el artículo 1º.

**Sr. Anastasi.** — Deseo hacer una pregunta al señor miembro informante de la comisión: si entiende que esta organización tiene en mira exclusivamente los territorios nacionales, o si considera que la gendarmería es necesaria también en el territorio de las provincias.

**Sr. Videla Dorna.** — Está bien claro en la ley.

**Sr. Susan.** — De las palabras que acabo de pronunciar surge esa apreciación que hace el señor diputado y es precisamente esa manera de pensar que hace que acompañe la proposición del señor diputado por la Capital.

**Sr. Anastasi.** — Entonces, quiere decir que la comisión acepta la modificación...

**Sr. Castex.** — No hablamos por la comisión. Es la opinión del señor diputado Susan y del que habla.

**Sr. Videla Dorna.** — La comisión no acepta modificación ni agregado alguno al artículo 1º.

**Sr. Anastasi.** — Tienen importancia fundamental como elemento de interpretación de la ley las palabras del señor miembro informante de la comisión. Cuando se aplique esta ley lo primero que harán los jueces es leer la exposición del miembro informante. Si el señor miembro informante dice que esta ley se refiere a los territorios nacionales, ¿por qué vamos a votar el artículo 1º? ¿Por qué no acepta la comisión la sugestión del señor diputado Repetto, que traduce, al parecer, el pensamiento de los miembros de la comisión?

**Sr. Iriondo.** — Es una opinión personal de los señores diputados.

**Sr. Anastasi.** — Las palabras del miembro informante traducen el pensamiento de la comisión.

**Sr. Ruggieri.** — Ningún otro miembro de la comisión ha dicho lo contrario.

**Sr. Ravignani.** — Pido la palabra.

**Sr. Cisneros.** — El señor diputado también está de acuerdo...

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Permítame el señor diputado. Nada va a aclarar el debate dialogado.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital, que la ha solicitado.

**Sr. Ravignani.** — Pediría una simple aclaración al miembro de la comisión diputado Videla Dorna.

El artículo 3º dice «sus funciones». Se establece el asiento, pero puede funcionar en cualquier parte del territorio de la Nación.

**Sr. Videla Dorna.** — Cuando entremos a considerar el artículo 3º podrán formularse esas observaciones.

**Sr. Ravignani.** — Como el señor diputado ha concordado los artículos, yo también los concuerdo.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

**Sr. Ministro del Interior.** — Manifesté en la sesión anterior, con motivo de las objeciones de que había sido motivo el proyecto en discusión, que me haría cargo de ellas al tratarse en particular el despacho de la comisión. Voy a considerarlas y me permitirá la Honorable Cámara que me ocupe de todas en conjunto, para no insistir después en los detalles en particular.

Pero antes deseo recordar que se trata de una iniciativa cuyo origen remonta a 26 años atrás y que los sucesivos proyectos presentados han perseguido siempre, como finalidad esencial, crear para los territorios nacionales un cuerpo policial que pudiera prestar servicios efectivos y eficaces no sólo en el interior de los territorios sino también en sus zonas fronterizas.

Deseo advertir también que, como lo establece el proyecto en discusión, hay un período previo de organización y de reclutamiento que puede durar hasta tres años, período que bien podríamos llamar de experimentación, en cuyo transcurso de aplicación y desarrollo han de notarse las fallas reales que contenga, ya que es muy fácil por vía de hipótesis descubrirlas desde ahora, tratándose de un proyecto cuyo análisis presenta aspectos aparentemente contradictorios, desde que se trata de una gendarmería que tendrá carácter de militarizada en su organización interna y régimen disciplinario, pero que actuará y desempeñará funciones de policía civil. No creo, entonces, que debamos apresurarnos desde ya a subsanar las posibles fallas que pueda presentar esta ley, y creo que conviene dejarla en su aplicación práctica para pedir después las modificaciones que sean necesarias.

Entre las observaciones que se han hecho al proyecto, figura la que surge de la correlación de los artículos 1º, 8º y 16 de la ley, que crea, según el orador impugnante, una situación ver-

daderamente singular, puesto que si la gendarmería no forma parte integrante del ejército, y si sus componentes no tienen estado militar, no se ve cómo pueden quedar sometidos al Código de Justicia Militar en su régimen disciplinario. Desde luego, señor presidente, conviene hacer notar que cuando el proyecto somete la gendarmería a la jurisdicción militar es bajo los aspectos de su organización interna y régimen disciplinario, pero que por las responsabilidades que surjan de sus relaciones con el público, para sus componentes será competente la justicia ordinaria, porque entonces obra y actúa como policía civil.

Las disposiciones del Código de Justicia Militar, como las contenidas en los demás códigos, no tienen la intangibilidad de las cláusulas constitucionales. Son creaciones y derivaciones de la ley, que pueden modificarse, ampliarse o limitarse por imperio de otra ley. ¿Acaso, cuando la ley creadora del Código de Justicia Militar en su artículo 118 comprende dentro de la jurisdicción militar a los guardias nacionales movilizados, a los alumnos de las escuelas e institutos militares y a los asimilados, no puede otra ley especial extender esa jurisdicción a la gendarmería nacional bajo ciertos aspectos? Voy a citar, en apoyo de la tesis que expongo y para su mayor autoridad, la opinión del profesor francés Pierre Hugueney, opinión perfectamente valedera no obstante el régimen unitario de la República francesa, porque tanto en los regímenes federales como en los unitarios, los principios que distinguen y separan la jurisdicción civil de la militar son los mismos.

Dice en su obra el profesor citado: «En primer lugar, según el artículo 3º apartado 6º del Código de Justicia Militar, los oficiales de gendarmería, los suboficiales de gendarmería y los gendarmes, no son justiciables por ante los tribunales militares por los crímenes y delitos cometidos por ellos en el ejercicio de sus funciones relativas a la policía judicial, y a la comprobación de contravenciones en materia administrativa. Los gendarmes cumplen, en efecto, un servicio de naturaleza mixta. Son militares, y a este título están sometidos, para todo lo que concierne a la disciplina general, como los demás militares, a la jurisdicción militar. Pero al mismo tiempo son agentes de policía judicial, lo que constituye una función civil. En este carácter deben, pues, como lo decide el artículo 3º, apartado 6º, permanecer bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios por todos los crímenes o delitos que co-

metan en el ejercicio de sus funciones especiales.»

La jurisdicción y la competencia son creación de la ley, son derivaciones de la ley. Lo que la ley no puede crear son fueros personales, porque los prohíbe la Constitución. Si mañana una ley especial determina que cierta clase de funcionarios que se dedican a una función, determinada por la característica e índole de la misma, están sometidos a la jurisdicción militar, y por faltas que cometen son juzgados por los tribunales militares, ¿puede sostenerse que esos ciudadanos han sido sacados de sus jueces naturales?

Otra de las objeciones que se han hecho al proyecto y que me parece igualmente rebatible, dicho sea con el debido respeto que me merece la preparación jurídica del señor diputado que la ha formulado, es la que surge del inciso b) del artículo 3º de la ley, de que el Congreso de la Nación carece de facultades para crear una policía federal con jurisdicción en todo el territorio de la República.

Desde luego, cuando el proyecto habla de la actuación de la policía militarizada, no quiere decir que va a actuar lisa y llanamente en el territorio de las provincias, sino que lo hará a requerimiento de las autoridades federales, para auxiliarlas en el desempeño de sus funciones.

**Sr. Pizarro.** — ¿Si me permite el señor ministro?

**Sr. Ministro del Interior.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Pizarro.** — ¿En qué casos actuaría?

**Sr. Ministro del Interior.** — Cuando lo requieran las autoridades competentes, como ya lo voy a expresar.

**Sr. Pizarro.** — ¿En qué casos cabría el requerimiento de una autoridad estatal? No hay más que estos poquísimos casos: casos de guerra...

**Sr. Ministro del Interior.** — Hay muchos casos. Como los de ejercer las funciones de policía.

**Sr. Pizarro.** — Son muy limitados.

**Sr. Ministro del Interior.** — Permítame avanzar en mi exposición y en seguida el señor diputado me va a poder refutar con toda comodidad, porque voy a tratar, aunque muy brevemente, el aspecto de los poderes de policía.

**Sr. Pizarro.** — Muy bien, señor ministro.

**Sr. Ministro del Interior.** — Decía, señor presidente, que cuando la ley habla de autoridades federales, ¿a qué autoridades federales puede

referirse? A las que tienen competencia para solicitar el auxilio de esa fuerza, es decir, a los jueces federales, que son los magistrados depositarios de una parte del poder público por mandato constitucional, que tienen imperio, que son representantes del poder de la Nación, que tienen autoridad propia por otorgamiento constitucional.

Se ha querido hacer extensivo este concepto a otros empleados nacionales en provincias, rectores de colegios nacionales, encargados de la Defensa Agrícola, a gerentes de Bancos, inspectores de Impuestos Internos, etcétera. Pero no es ésa la autoridad federal a que se refiere la ley, porque esos empleados no son depositarios de ninguna parte del poder público por otorgamiento constitucional.

Por otra parte, dentro de nuestro régimen constitucional los poderes de policía corresponden a la Nación y a las provincias. A las provincias, porque no los han delegado y a la Nación porque son esenciales para su conservación y defensa para el logro de sus fines sociales, por el uso de sus medios adecuados y porque la Constitución se los asigna por implicancia en el inciso 18, del artículo 67.

El Congreso, por otra parte, ha ejercido ese poder de policía en las provincias con la creación de la Defensa Agrícola, con la ley de policía sanitaria animal y vegetal y nuestra Suprema Corte ha dicho en el fallo consignado en el tomo CLIV, página 14, lo siguiente: «Como norma general dentro del régimen federativo de nuestro sistema institucional, semejante al de Estados Unidos de América, el poder de policía corresponde a las provincias o Estados y la Nación lo ejerce dentro del territorio de las mismas cuando expresamente le ha sido conferido o cuando es forzosa consecuencia de otras facultades constitucionales.»

No hay, pues, en la letra ni en el espíritu del proyecto, ninguna lesión a las autonomías provinciales y no se afecta ningún principio de derecho constitucional.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Pizarro.** — Pido la palabra.

Cuando le preguntaba recién al señor ministro en qué casos podía intervenir en las provincias la policía federal a crearse, me contestaba que eran numerosos. Yo le digo que son muy pocos.

**Sr. Ministro del Interior.** — Le digo al señor diputado que el poder de policía se ejerce bajo múltiples aspectos y uno es el que se refiere a represión y vigilancia por medio de gendarmes o agentes como lo hace Estados Unidos con la

policía federal y que teniendo un régimen federal más acentuado que el nuestro, ha creado la policía federal que actúa en todo el territorio de Estados Unidos.

**Sr. Pizarro.** — Tengo en mi banca —y voy a leer— el Anuario Militar de la Sociedad de las Naciones...

**Sr. Ministro del Interior.** — Y yo tengo la ley de Estados Unidos.

**Sr. Pizarro.** — ... correspondiente a 1936, en que dice textualmente que en Estados Unidos no existe ningún control de policía federal dentro de su territorio.

**Sr. Ministro del Interior.** — Tengo la ley de 1934, que se la puedo facilitar al señor diputado.

**Sr. Pizarro.** — Si la ley es de 1934, quiere decir que este anuario es deficiente.

En lo que se refiere a los casos en que el Poder Ejecutivo de la Nación puede intervenir en provincias, el asunto es perfectamente claro: Los gobernadores son agentes naturales y directos del poder federal. Vale decir, que al único que se le puede reclamar apoyo es al poder ejecutivo provincial, y nunca puede entrar una autoridad ni una fuerza federal dentro del territorio provincial. Ahora, me pregunto: ¿en qué casos puede un poder ejecutivo de provincia reclamar apoyo del gobierno federal, en menoscabo de su propia soberanía y autonomía? No concibo más que tres casos: el de guerra o invasión exterior; el de sedición contra ese poder, cuando las fuerzas de su propia policía son insuficientes para restablecer el orden jurídico alterado, y el caso de una invasión de una provincia por otra. Vale decir, que son los casos típicos en que se produce *casus belli*, llámese externo o civil. Y esos casos no se resuelven con intromisión de la policía, sino por las fuerzas militares de la Nación. La policía federal o la gendarmería jamás pueden intervenir en ningún Estado. Las solicitudes de un juez federal deben ser hechas al Poder Ejecutivo de la provincia y el poder federal tiene el remedio, cuando el poder provincial no cumple, para obligarlo a cumplir por cualquier medio, incluso el más extremo de allanar su autonomía, por los recursos legales, y no por la fuerza.

Esa es la posición jurídica que reclamo, que esta Cámara establezca en forma absolutamente clara, porque, de lo contrario, habremos terminado con el federalismo institucional de la Constitución. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Anastasi.** — Sería interesante que el señor ministro hiciera referencias precisas a esa ley de Estados Unidos, porque, según mis informaciones —que no son tan recientes— en

ningún caso el ejército federal y desde luego las instituciones análogas, pueden intervenir en los Estados, sino a requerimiento de las autoridades estatales.

Por eso, sería interesante oír la lectura de esa ley que dispone lo contrario, al parecer.

**Sr. Ministro del Interior.** — Me va a excusar el señor diputado, que no lea toda la ley, porque no quiero ocupar tiempo a la Honorable Cámara, pero voy a tener el gusto de hacérsela alcanzar.

**Sr. Cooke.** — Pido la palabra.

Para decir, simplemente, que el señor ministro del Interior ha hecho una exposición más bien de conjunto.

Ha tocado, entre otros puntos, éste, alrededor del cual se hace la discusión en este momento y que sería más lógico tratarlo al discutirse el artículo 3º, inciso b), que se refiere a las funciones de esta gendarmería nacional.

Lo referente a la aplicación del Código de Justicia Militar, corresponde discutirlo cuando se traten en particular los artículos 6º, 7º y 8º, especialmente; de lo contrario me parece que se va a hacer nuevamente una discusión en general sobre esta ley.

Considero que debemos concretarnos al artículo 1º y entiendo que lo que está en discusión en este momento es el agregado propuesto por el señor diputado Repetto, que yo apoyo, entendiendo que la comisión debe aclarar que al votarse que esta policía tendrá el carácter de policía «militarizada», queda aclarado que no forma parte del ejército de la Nación, como lo dice textualmente el artículo 1º, aunque lo contradicen algunas otras disposiciones; y al mismo tiempo, que esta redacción significa que el personal de esta gendarmería no tiene «estado militar», lo que si bien resulta del artículo 16 del proyecto, está contradicho por otras disposiciones que enumeré y analicé anteriormente.

**Sr. Anastasi.** — Me reservo para cuando se trate el artículo 3º, dar lectura a la ley, cuyo texto ha tenido la gentileza de hacer llegar a mi banca el señor ministro del Interior y la lectura servirá, lo anticipo, para demostrar que no tiene vinculación con el asunto en discusión.

**Sr. Cooke.** — Me reservo dar conocimiento a la Honorable Cámara de los conflictos que se han planteado con motivo de los pedidos de fuerzas policiales nominales o militares, formulados por los jueces federales y otras autoridades en el territorio nacional.

**Sr. Cisneros.** — Pido la palabra.

Como soy de los que han votado en contra, en general, por la ley, preocupado especialmente

por el artículo 1º, me va a disculpar el señor ministro del Interior si insisto en el deseo de que claramente exprese si entiende o no entiende que esa gendarmería, está en funciones normales exclusivamente en los territorios nacionales como se ha propuesto o si de sus palabras, por implicancia pareciera que debe actuar en todo el territorio de la República, señalo una especie de contradicción con lo que ha dicho el señor ministro al contestar una pregunta que hizo un señor diputado por Córdoba y con lo que han manifestado los miembros de la Comisión de Guerra.

**Sr. Lazo.** — Señor presidente: al señor ministro se le presenta una interrogación que está expresamente contestada en el artículo 3º, que dice que la policía militarizada intervendrá en todos los lugares sujetos a jurisdicción federal. Si el señor diputado lee el artículo 3º, me parece que no tendrá necesidad de formular su pregunta.

**Sr. Cisneros.** — Como es una ley que puede dar lugar mañana a interpretaciones judiciales, es conveniente que se exprese con absoluta claridad el sentido del artículo.

**Sr. Lazo.** — La Cámara, cuando se trate el artículo 3º, lo aprobará o rechazará, fijando así su criterio.

**Sr. Repetto.** — Pido que se vote por partes: Primero: «Créase la gendarmería»; segundo: «...de los territorios nacionales...», y tercero: lo que sigue del artículo.

**Sr. Lazo.** — Debe votarse primero el despacho de la comisión.

**Sr. Repetto.** — Es el despacho de la comisión; pero todo diputado tiene derecho a que se vote por partes. He propuesto el agregado de cuatro palabras a continuación de «gendarmería».

**Sr. Ruggieri.** — Es un agregado que se interpone en la mitad del artículo. Por eso el señor diputado por la Capital, en uso de un derecho reglamentario, solicita que se vote por partes.

**Sr. Lazo.** — Entiendo que la indicación del señor diputado por la Capital es pertinente una vez que se vote el artículo, pero no en la segunda parte del primer artículo.

**Sr. Repetto.** — Esto es lo que caracteriza a la ley, de acuerdo a nuestra concepción.

**Sr. Osorio.** — Pido la palabra.

La proposición del señor diputado por la Capital, consiste en votar por partes el artículo del despacho. Este artículo tiene una redacción determinada a la cual el señor diputado pretende incorporar su agregado en este mo-

mento. El señor diputado tiene el derecho de pedir que se vote por partes el despacho de la comisión y hacer luego los agregados que quiera, pero no puede intercalar en este despacho lo que propone como agregado.

Reglamentariamente, pues, corresponde que se vote el despacho de la comisión, y si el señor diputado quiere que se haga por partes, aceptaremos, pero no es el caso, porque no corresponde que así se haga, de intercalar en la ley una proposición nueva, contrariando el texto del despacho.

**Sr. Repetto.** — Es lo que pido: que se vote por partes el artículo del despacho.

**Sr. Osorio.** — Entonces que se vote por partes: «Créase la gendarmería nacional con el carácter de policía militarizada federal...»

**Sr. Ravignani.** — Hasta ahí, hasta la coma.

**Sr. Repetto.** — Que se voten las tres primeras palabras: «Créase la gendarmería».

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Cree la Presidencia que la discusión no tiene objeto, porque de cualquier manera, si se acepta el agregado del señor diputado, aunque se vote el artículo del despacho, es evidente que la intercalación se hará en la parte que el señor diputado indica.

**Sr. Ruggieri.** — Queda aclarado, de acuerdo con las últimas manifestaciones del señor diputado por Buenos Aires, que no obstante votarse íntegramente el artículo en la forma despachada por la comisión, si se aceptara después el agregado, se incorporará a la altura que indica el señor diputado por la Capital.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se va a votar el artículo tal cual ha sido despachado por la comisión.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se va a votar el agregado, que consiste en intercalar, después de las palabras «gendarmería nacional»: «en los territorios nacionales».

**Sr. Cooke.** — Y suprimir, después de las palabras «policía militarizada», la palabra «federal».

**Sr. Videla Dorna.** — Hago presente que la comisión no acepta el agregado.

**Sr. Anastasi.** — Vamos por partes.

El señor diputado miembro informante —el único que yo conozco—, el señor diputado por Santa Fe, dijo que entendía que esta sanción se refería a los territorios nacionales.

**Sr. Videla Dorna.** — También se ha manifestado que la comisión no acepta ningún agregado, ninguna modificación.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se va a votar el agregado.

**Sr. Prosecretario (Figueroa).** — Negativa de 38 votos. Votan 95 señores diputados.

**Sr. Cooke.** — Pido que se rectifique la votación.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Se va a rectificar.

—Rectificada la votación, resulta negativa de 37 votos.

**Sr. Videla Dorna.** — Hago indicación de que artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

—Sin observación, se aprueba el artículo 2º.

—En consideración el artículo 3º.

**Sr. Ravignani.** — Pido la palabra.

Al discutirse el artículo 1º ya se han anticipado algunas objeciones; ahora quiero manifestar, ante todo, que si he votado en general se debe a que entendía era necesaria y útil esta policía, exclusivamente, para los territorios nacionales.

Pero ahora al introducir este artículo 3º en la ley, que le asigna funciones fuera de los territorios nacionales, a mi juicio se altera el propósito de la función que debe prestar esta policía.

Hace un momento, uno de los miembros de la comisión, concordaba el artículo 1º con otros, relacionándolo con la organización de la policía. Pero aquí, en el 3º, se enuncia el alcance de la función, es decir, el lugar donde debe prestar servicio esta policía.

Gramaticalmente, la función significa la acción y ejercicio de un empleo, facultad u oficio. De manera que puede la policía tener asiento en los territorios nacionales, pero desempeñar su función fuera de los lugares en donde tiene sus cuarteles, asiento, etcétera.

Por eso entiendo que esta disposición es de suma gravedad. Si intervengo en el debate, lo hago con una convicción íntima. No me preocupa que la ley salga inmediatamente, en 24 horas, porque esa premura no puede en forma alguna desvirtuar los propósitos de que el Congreso nacional dicte una ley limpia de toda objeción de índole institucional y hasta de índole meramente legislativa, por las confusiones que la misma ley puede tener en su aplicación. Si la otra rama del Congreso tiene el mismo

propósito, prestará a las reformas, urgente sanción y la ley podrá entrar en vigencia de inmediato.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo no puede ver en estas observaciones, ni tampoco los colegas, otro propósito que el de encuadrar las disposiciones de esta ley, de suma importancia y necesidad, lo repito, dentro de la arquitectura constitucional con que el país ha establecido la armonía entre el poder nacional y los poderes provinciales.

Entiéndese, señor presidente, que para los lugares de régimen federal, existe una acción total administrativa y política, vale decir, que para los territorios nacionales el gobierno de la Nación, dentro de las facultades mismas del artículo 67, inciso 14 de la Constitución nacional, es el único órgano de la Constitución que puede intervenir en el gobierno y en la acción política y administrativa de los territorios; pero no pasa lo mismo en los lugares sometidos por razón meramente administrativa, como son los establecimientos de la Nación en las provincias.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1º, don Carlos A. Pita.

Los establecimientos de la Nación en las provincias se crean en función puramente administrativa, quedando en pie en las mismas toda la estructura política que la Constitución ha querido dar a las relaciones entre los poderes nacional y provinciales. En el mensaje del Poder Ejecutivo de 31 de agosto de 1926 —tomo IV, página 786, del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados— se dijo que la creación de la gendarmería nacional responde a necesidades vitales de determinadas regiones del país. Entiendo que en este momento —y lo han dicho miembros de esta Cámara que han intervenido en el debate—, las necesidades vitales se han producido en los territorios nacionales.

En ningún momento, ningún diputado de provincia ha dicho en el seno del Parlamento que sea necesario el auxilio de la fuerza pública nacional para que dentro de la jurisdicción de la provincia se pueda mantener el orden, la policía y ejercer la administración.

El artículo 3º establece, a mi juicio, dos conceptos referentes a dónde y cómo se ejercen las funciones de la gendarmería. Así, dice en el inciso a) que en todos los lugares sujetos a la jurisdicción federal, con excepción de los sometidos a la jurisdicción militar; y en el inciso b) que en cualquier parte de la Nación, siem-



pre que sean requeridas para auxiliar a las autoridades federales. A mi juicio, lo grave es que en el inciso *a*) establece la universalidad de lugares, y en el inciso *b*) el requerimiento de los funcionarios. Es una manera de tener en estado latente la intervención federal en todos los lugares.

Sabemos, —lo han dicho muy bien los señores ministros de Guerra y del Interior—, la forma cómo ellos entienden que debe aplicarse la ley; pero la ley no se dicta para el criterio de determinados funcionarios que en un momento dado saben el alcance que debe tener y el estado de conciencia con que debe aplicarse: se dicta para todos los hombres llamados a la función pública. Y sostengo que tal como está redactado el artículo, en cualquier momento el Poder Ejecutivo nacional o algún funcionario dependiente de él, aplicándolo literalmente, puede enviar las milicias a todos los lugares sujetos a la jurisdicción federal y a las provincias, que a los efectos de la policía deben quedar exclusivamente reservadas a la intervención de las policías provinciales.

Para fundar esa disposición se nos ha traído a colación la legislación comparada, refiriéndose a Chile, a Francia y a algunos otros países. Se nos ha hablado aquí de los países más unitarios dentro del régimen político. Francia es un Estado netamente unitario, tiene simples prefecturas y no hay problema de choque entre la jurisdicción nacional y la provincial. Nosotros tenemos una estructura política distinta. Leyes de esta índole es necesario adecuarlas a la estructura política de cada país. Históricamente, las provincias se han ido desprendiendo en forma paulatina de una serie de parcelas de su autonomía: en primer término de la facultad de levantar tropas y organizar milicias, facultad que han ido delegando por el régimen de los pactos, que es invocado por el Preámbulo de la Constitución, o por un *modus vivendi* lento que ha traído días sangrientos para la República, como ocurrió en el año 1880.

Entiendo que las provincias no pueden ya desprenderse de otra cosa que de lo que expresamente se han desprendido por la Constitución y que, tal como está redactado el artículo 3º, venimos a abrir la puerta para que en un momento determinado, gobiernos de provincia un tanto débiles para defender su autonomía, vayan renunciando también a la facultad de policía, que es esencial para que exista el gobierno autonómico.

No votaré el artículo porque entiendo que en vez de robustecer el orden en las provincias va

a romper en cierto momento la armonía entre el poder nacional y los poderes provinciales. ¿A qué sancionar una ley, señores diputados, que mañana puede ser, precisamente, un motivo de conflicto? ¿Para qué sancionar una ley de esta índole, habiendo llegado a la evolución política en que nos encontramos, e incurrir en situaciones semejantes?

Tanto los autores que han fundado nuestro régimen, como Alberdi, y los comentaristas extranjeros de regímenes federales —no voy a citar sino algunos, como Tiffany y Tucker entre los modernos— y los tratadistas nacionales como Estrada, Montes de Oca, Joaquín V. González, Matienzo, González Calderón, todos, han fijado esta armonía entre las dos esferas del poder nacional y de los poderes de provincia. La policía militarizada no contribuirá a esa armonía, porque con la apariencia de llevar el orden puede ser mañana motivo de conflictos institucionales.

El artículo 104 de la Constitución establece perfectamente el deslinde de las atribuciones de las provincias, y el artículo 108 determina lo que no pueden hacer las provincias. El artículo 104 dice que conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación, teniendo en cuenta el pacto de unión del año 1859 con la provincia de Buenos Aires, que por suerte ha pasado ya a la historia. Pero no vayamos más allá, no rompamos esta armonía perfectamente establecida. Cuando se ha querido quitar atribuciones a las provincias se ha determinado al efecto, expresamente, en el artículo 108, que debemos concordar con los artículos de las atribuciones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

En cuanto al artículo 110, según dice Montes de Oca, es el que ha dado lugar a opiniones encontradas cuando establece que los gobiernos de provincias son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, leyes que pueden ser de orden local, como pueden ser de carácter federal. Los gobiernos de provincia son agentes naturales del gobierno de la Nación para hacer cumplir esas leyes nacionales.

**Sr. Medina.** — No son el agente obligado, señor diputado.

**Sr. Ravignani.** — Así es, y me da mucha más razón.

**Sr. Medina.** — Esta ley establece cuál ha de ser el agente en ciertas circunstancias.

**Sr. Ravignani.** — Pero no puede ser renunciando a la función de policía, que es una de las atribuciones de la autonomía provincial. Como dice muy bien Vicente Fidel López, quitar al Ejecutivo la administración financiera y el mando de la fuerza para ejercer su autoridad, es crear una sombra de poder o hacer desaparecer el poder mismo.

—Hablan a la vez los señores diputados Medina, Ravignani y Videla Dorna.

**Sr. Osorio.** — ¿El señor diputado piensa que se ha roto la armonía entre el poder federal y los poderes provinciales con las prefecturas marítimas?

**Sr. Ravignani.** — Están en la jurisdicción nacional de los ríos y de los puertos establecida por la Constitución nacional.

**Sr. Osorio.** — Están en territorio de las provincias.

**Sr. Ravignani.** — No son territorio de las provincias; las riberas de los ríos navegables y los puertos son territorios de jurisdicción federal.

**Sr. Osorio.** — Pero están dentro de las provincias.

**Sr. Ravignani.** — No, señor diputado. Y las prefecturas son resguardos en función aduanera, no en función militar.

**Sr. Osorio.** — Y función policial.

**Sr. Ravignani.** — Función policial aduanera.

**Sr. Osorio.** — Función policial aduanera o no aduanera.

**Sr. Ravignani.** — No deben tener más función policial que la aduanera; y no actúan en territorio de las provincias sino en jurisdicción federal.

—Hablan simultáneamente los señores diputados Osorio y Ravignani.

**Sr. Presidente (Pita).** — Ruego al señor diputado por la Capital que no admita las interrupciones, para el buen orden del debate; por lo demás, corre el tiempo de que dispone para su exposición.

**Sr. Ravignani.** — Son observaciones cordiales que me permiten aclarar los conceptos.

Los gobernadores no son empleados del gobierno central, son jefes de las provincias con plena autoridad. En 1826 se rechazó la Constitución unitaria porque los reducía a la condición de empleados; y la Constitución de 1853 los ha establecido como poderes autonómicos con todas las atribuciones del poder. Se eligen

los gobernadores para el cumplimiento de las leyes, lo que es una garantía, porque esos gobernadores están en relación inmediata con el pueblo que los elige. Y no nos olvidemos de que todos somos argentinos, pero que el pueblo de las provincias elige sus propios gobernantes y hace responsables a esos gobernantes por la forma cómo desempeñan sus funciones. El artículo 1.041 tiene, en realidad, relación como antecedente con la enmienda X de la Constitución de Estados Unidos, que no excluye las facultades concurrentes de las provincias y de la Nación y que resultan de la Constitución misma, y en donde se establezcan esas facultades concurrentes, y nada más. Pero no puede desconocerse la esfera de acción de las provincias, su acción política y social del gobierno mediante el *imperium* que se da a los gobernadores.

Alberdi había establecido con toda precisión el alcance del poder provincial: «El poder reservado al gobierno local en el orden local es más extenso, porque es indefinido y comprende todo lo que abraza la soberanía del pueblo. El poder general es limitado y se compone, en cierto modo, de excepciones; sólo es de su incumbencia lo que está escrito en la Constitución.»

—Se anuncia la expiración del término acordado al orador para usar de la palabra.

**Sr. Ravignani.** — Me acaba de autorizar el sector a que pertenezco, para que hable en su nombre.

**Sr. Presidente (Pita).** — Si habla a nombre del sector, puede continuar el señor diputado.

**Sr. Ravignani.** — Continúa Alberdi: «Todo lo demás, es de las provincias. Nada más preciso, más eficaz y más esencial al progreso y enriquecimiento de los pueblos argentinos que el poder reservado a sus gobiernos provinciales, que es el llamado a transformar su ser y a salvar la República, principio éste que no contradice la doctrina de la fuente norteamericana». Y ya interpretando esta misma doctrina de la autonomía local como emanada del ejercicio de la ciudadanía, parecería que al ocuparnos de estas cosas tratáramos de funcionarios federales, de jueces, etcétera, cuando estamos hablando de la esencia misma de las autonomías provinciales, de los intereses de orden social y económico de las provincias, que se encontrarían subordinados a las intervenciones requeridas por funcionarios que desempeñan cargos administrativos y nada más.

Un tratadista moderno, Tucker, refirma el

concepto que ya había expresado el mismo Tifany, cuando dice que la reserva de los poderes es la base del derecho de los Estados, del pueblo de los Estados, los poderes políticos bajo la Constitución. Ellos no son confiados a los Estados o pueblos por virtud de la Constitución; ellos son inherentes al pueblo de los Estados, y a menos que sean delegados a los Estados Unidos o por su acta constitucional prohibidos a aquéllos, quedan para los Estados, respectivamente, y el pueblo. La palabra «reservados», en la Constitución, es sinónima de la palabra «retenidos», en la Confederación. Esta enmienda, entonces, distingue los poderes de los Estados Unidos y los poderes de los Estados. Los primeros son obtenidos por los Estados Unidos mediante una delegación de los Estados. Los últimos, los poderes reservados, quedan en y son retenidos por los Estados, porque no son delegados ni prohibidos.»

Esto mismo han entendido, entre nosotros, escritores como Estrada, que ha hecho un plan-teo de las facultades de cada entidad, vale decir, de la entidad nación y de la entidad provincia.

Pido disculpas, señor presidente, si me refiero un tanto a la doctrina, porque no estoy exponiendo cuestiones oportunistas. Estoy fijando lo que yo entiendo el equilibrio que la Constitución ha querido crear entre los poderes provinciales y el de la Nación, equilibrio que, a mi juicio, se quebraría si se crearan estas milicias con destino exclusivamente a los territorios federales para emplearlas en los territorios de las provincias.»

Dice Estrada al respecto con toda claridad: «Podemos decir que las provincias invisten todas las facultades anexas a la idea de la soberanía social y del gobierno, con excepción de las siguientes, que expondré en la forma en que «El Federalista» las resume: primero, aquellas que hayan sido expresamente prohibidas a las provincias por la Constitución federal; segundo, aquellas que hayan sido conferidas al gobierno federal como exclusivas; y tercero, aquellas que, conferidas al gobierno federal, aunque no como exclusivas, sean sin embargo de tal naturaleza que entrañe verdadera repugnancia y contradicción su simultáneo ejercicio de parte de la Nación y de parte de las provincias».

Sostengo, señor presidente, que crear una policía del tipo que se va a crear aquí existiendo ya las policías provinciales, en virtud de las autonomías provinciales, significa un evidente choque en el ejercicio de los poderes.

La Constitución ha establecido lo que debe ser de las provincias y lo que debe ser de la Nación. La función de la policía en las provincias, a mi juicio, es siempre provincial; no ha sido delegada en ninguno de los artículos de la Constitución. Si las provincias no llegaran a prestar el auxilio de la fuerza pública a requerimiento de las autoridades federales que ejercen funciones enteramente administrativas en esas provincias, se habría alterado la forma republicana de gobierno, porque en la forma republicana de gobierno lo esencial es el mantenimiento del orden interno.

Vamos así a la interpretación auténtica, que me hace decir que el artículo 3º, tal como está expresado en sus dos incisos, es repugnante al artículo 104 de la Constitución nacional.

Ello emana de nuestras fuentes, y así lo dice muy bien Joaquín V. González en su *Manual de la Constitución*, concepto que repiten muchos tratadistas: «Ha consagrado este artículo todo el derecho histórico argentino contenido en los estatutos y pactos anteriores. Esta es la regla general y comprensiva para dirimir en todo caso los conflictos posibles entre los dos órdenes de gobiernos y, según ella, el de la Nación, siendo conferido por las provincias es expreso, limitado y excepcional. La fuente de donde nacen los poderes conferidos o delegados, es la soberanía originaria, inherente al pueblo de sus respectivos territorios y su objeto es constituir la unión nacional».

Cuando el despacho dice que las funciones se ejercen en todos los lugares sujetos a jurisdicción federal y más adelante en cualquier parte de la Nación siempre que sean requerida; para auxiliar a las autoridades, yo entiendo que involucra a todo el territorio de la Nación y excluye en determinados momentos la concurrencia de las fuerzas policiales de las provincias. Estos mismos conceptos los han ratificado recientemente diversos autores, profesores de derecho y magistrados, como el doctor Juan A. González Calderón en su *Tratado de Derecho Constitucional*.

Las funciones administrativas de mantener el orden corresponden en provincias a las provincias, sean cuales fueren los funcionarios. Voy a dar un caso práctico. En la Universidad de Córdoba, que es nacional, se hace necesario por un desorden requerir la fuerza pública. Es la policía provincial la que debe concurrir. Si aconteciera en la Universidad del Litoral, que está a pocas horas de un territorio nacional, es la policía de Santa Fe la que debe prestar su auxilio y no la milicia de Resistencia,

por ejemplo, o de cualquier otra parte, que en pocas horas pudiera concurrir al requerimiento. Porque si los estudiantes de esa universidad, promotores del supuesto desorden, salieran a la plaza pública o a la calle, ya esas milicias, ajenas a la provincia, tendrían que cruzarse de brazos y dejar actuar a la policía provincial.

**Sr. Guglielmelli.** — No los dejarían salir...

**Sr. Ravignani.** — No me interrumpa con una cosa así. Estoy hablando en serio.

Esa milicia no podría salir a la calle persiguiendo a estudiantes dentro de la jurisdicción provincial porque cometería una intervención que provocaría un conflicto inmediato entre ambas jurisdicciones.

**Sr. Guglielmelli.** — ¿Y si la policía provincial fuera impotente?

**Sr. Ravignani.** — El gobierno provincial sabría requerir las fuerzas de la Nación para mantener el orden y el gobierno sabría cuáles tendría que mandar. Y si las provincias fueran incapaces de mantener el orden, desaparecería el gobierno y la autoridad; pero si la Nación se lo quita so pretexto de requerimiento, afirmo que sale de la acción meramente administrativa para entrar en una acción política que afecta la autonomía provincial. La Nación, por el contrario, debe afirmar la autoridad provincial y no con promesas de sus hombres de gobierno, sino con el respeto a las instituciones mismas. La Nación afianzará el orden robusteciendo la autoridad en las provincias. Las provincias han entrado en el concierto de la Nación precisamente cuando han conseguido mantener el orden y la Nación se ha considerado entonces realmente pacificada. Para este objeto queremos dar a la milicia de los territorios nacionales efectivos para que, en esa jurisdicción nacional, se mantenga el orden y se aseguren los derechos individuales en el mismo grado en que lo están en las provincias que integran la Nación.

Entiendo que dictar una ley de esta índole es disminuir la autoridad de las provincias. Soy federalista, porque la Constitución lo es. En este último tiempo la Nación ha ido absorbiendo muchas funciones provinciales, pero siempre en el orden meramente administrativo y en lo que se refiere a la instrucción primaria, a las obras sanitarias y hasta en la percepción de impuestos que luego distribuye, todo lo cual justifica nuestras dudas sobre la autonomía de provincias que van dependiendo de la distribución de recursos que puede efectuar el poder federal.

No podemos permitir, al menos en mi conciencia, que se le quite ahora una de las atribuciones esenciales del poder local. Las funciones policiales deben corresponder a las provincias, exclusivamente, y son las fuerzas provinciales las que deben acudir al llamamiento de todo funcionario, sea federal o provincial.

El gobierno de la Nación con sus recursos inmensos, con la fuerza del ejército nacional, con su ciudad Capital tan grande y poderosa, poblada por dos millones y medio de habitantes, y que dispone, además, de la gran riqueza que labran los habitantes de los territorios federales, manifiesta constantemente una inclinación a intervenir en las actividades provinciales.

Y eso es lo que queremos evitar manteniendo la pureza del principio institucional del deslinde entre las provincias y la Nación. Ya en el año 1879, señor presidente —y disculpe la Honorable Cámara este recuerdo histórico— en la provincia de Buenos Aires se plantearon debates, tal vez uno de entre los más importantes que se registran en el Parlamento provincial, por la calidad de los hombres que intervinieron y por la gravedad de los asuntos en debate. Se trataba de la movilización de las milicias por el gobernador de la provincia, doctor Carlos Tejedor, relacionado con la gran cantidad de armamentos que estaba comprando, porque preparaba la base de su futura campaña presidencial, que después derivó en la lucha por la capitalización de la ciudad de Buenos Aires; y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia, a pesar de ese fuerte autonomismo y localismo porteño, no vió bien que el gobierno de la provincia se saliera de sus facultades, levantando tropas, y propuso un voto de censura. En esos debates intervinieron hombres de la calidad de Lucio Vicente López, quien expuso una doctrina clara, admirable y terminante, de las facultades armónicas entre el gobierno de la Nación y de las provincias; Luis Varela, Leandro N. Alem y otros tantos que ilustraron y llevaron a gran altura el problema en medio de las pasiones candentes de la provincia de Buenos Aires, con barras bravías que a cada dos minutos interrumpían a los oradores; a pesar de eso, hubo un gran sentido de equilibrio y se quiso establecer el alcance de las facultades provinciales y de la Nación. En esos momentos el diputado Leandro N. Alem enunciaba los peligros de la acción centralizadora de la Nación, esa «tendencia centralizadora que se armoniza con ese tutelaje sobre las provincias y que tiene que conducirnos paulatinamente al

unitarismo y acaso al despotismo más tarde, quebrando insensiblemente todos los resortes de nuestro sistema».

Creo, señor presidente, que se puede llevar la cultura que traduce la enseñanza primaria a las provincias con la ley Láinez; que se pueden sanear los lugares densamente poblados mediante las Obras Sanitarias de la Nación; pero lo que no se puede hacer es que en cualquier momento las policías militarizadas de la Nación penetren en el territorio de las provincias exclusivamente para el mantenimiento del orden. Eso corresponde constitucionalmente a las policías provinciales. En las provincias sus gobernadores son los agentes naturales del gobierno de la Nación. Ellos, con sus medios de gobierno y en su jurisdicción, sostendrán a los funcionarios nacionales como lo han hecho siempre. Ni un solo momento ha sido necesario apelar para el simple orden interno, en estado normal, a las fuerzas de la Nación. Emplear las milicias o distraerlas del motivo de su creación que es los territorios nacionales, es quitarle a la ley una de las virtudes más grandes, que quiere que se concentre toda esta fuerza, precisamente, en los extensos territorios nacionales de la República, y en cierto momento puede convertirse en una intervención federal.

Con esto me parece que abrimos la puerta para entregar a los funcionarios administrativos de la Nación el medio para crear una intervención velada y es esto lo que, a mi juicio, no puede aceptarse, porque entiendo que repugna a preceptos fundamentales de la Constitución. Todo ello me induce a votar en contra del artículo 3º, en sus dos incisos.

**Sr. Anastasi.** — Pido la palabra.

Ante todo, señor presidente, es significativo que sean los diputados por la Capital los que tienen que defender las autonomías provinciales un poco maltrechas en este artículo tercero; y es, además, significativo que para justificar esa violación del derecho público provincial se haya hecho o bien alusión a leyes de países unitarios o bien se hayan creado leyes que no existen en países federales, como tendré oportunidad de demostrarlo al leer el texto de la ley, que tuvo la atención de facilitarme el señor ministro del Interior. Se ha mencionado a Chile, Francia y, como bien lo ha dicho el señor diputado por la Capital en su brillante exposición, se trata de países excesivamente centralistas, donde no se concebiría una dualidad de funciones en materia policial. Se ha mencionado también a Canadá, pero este país ha sido citado equivocadamente. La policía montada de Canadá, gendarmería de los Dominios,

en una formación —dice el Anuario de la Sociedad de las Naciones— organizada militarmente a cargo del gobierno nacional y dirigida y administrada por el ministro de Justicia; sirve para asegurar la ejecución de las leyes y el mantenimiento del orden en los diferentes territorios y regiones del Canadá. Se sabe, señor presidente, que los Estados se llaman provincias en Canadá y además de las provincias existen los territorios y las regiones, y sobre esos territorios y regiones tiene jurisdicción la policía federal.

En el Brasil, que marcha rápidamente hacia un régimen unitario —como lo demuestra la última Constitución y como lo demuestran las diversas iniciativas de orden constitucional para unificar, por ejemplo, el procedimiento—, en el Brasil —dije— la policía militar es del distrito federal, dirigida por un general o un coronel del servicio activo del ejército.

Vamos ahora a Estados Unidos. Lamento que no esté en su banca el señor ministro del Interior, porque entonces tendría oportunidad de rectificar o ratificar lo que ha dicho según la versión taquigráfica que tengo en mi poder y que no ha sido corregida por él. El señor ministro del Interior, dirigiéndose al señor diputado por Córdoba expresó: «Le digo al señor diputado que el poder de policía se ejerce bajo múltiples aspectos y uno es el que se refiere a represión y vigilancia por medio de gendarmes o agentes, como lo hace Estados Unidos con la policía federal, y que teniendo un régimen federal más acentuado que el nuestro, ha creado la policía federal que actúa en todo el territorio de Estados Unidos».

—Ocupa nuevamente su banca el señor ministro del Interior, doctor Diógenes Taiboa.

Ahora bien, señor presidente: En Estados Unidos no existe policía federal. El señor ministro me hizo llegar esta ley, cuya lectura casi es inofensiva. Es una ley para facultar a ciertos miembros de la División de Investigaciones del Departamento de Justicia, para practicar arrestos en ciertos casos y para otros propósitos. No hay la más remota referencia en el texto de la ley a la actuación de estos funcionarios de policía en el territorio de los Estados particulares de la Unión Americana.

Yo había consultado la obra que está más a mano sobre derecho constitucional de Estados Unidos, la de Willoughby, edición de 1929, y otra para uso de los universitarios, de 1934, y desde luego, en esta obra, en que se hace

un estudio preciso de la organización militar de Estados Unidos, se habla del ejército, de las tropas federales, de la guardia nacional, de las reservas; pero en ninguna parte se menciona la policía federal. Y si alguna duda cupiera, no hay más que citar el Anuario de la Sociedad de las Naciones de diciembre de 1936. Las publicaciones de la Sociedad de las Naciones son admirablemente documentadas, tienen una información preciosa y el que quiera, por ejemplo, estudiar el movimiento que se produjo en la República Argentina con motivo de la ley de Bancos y del Instituto Movilizador, deberá acudir a esas publicaciones, porque son la mejor fuente de información entre nosotros; de suerte que una cita, una referencia de la Sociedad de las Naciones, muy difícilmente será falsa.

La página 357, de este anuario, que me ha facilitado el señor diputado por Córdoba, dice precisamente: «Policía. El gobierno nacional no organiza ni controla ninguna policía federal». Hace después las referencias sobre organización del ejército, que coinciden con todo lo que sabemos.

Cuando el señor ministro hizo alusión a la intervención de la policía federal en el territorio de los Estados, yo entendí, por defecto de audición, que se refería a la intervención del ejército federal, que ha ocasionado algunos conflictos en Estados Unidos. Por ejemplo, en el tratado citado, página 1554, se historia el que se produjo con motivo de la reclamación del gobernador del Estado de Illinois contra el presidente de la República, porque había mandado fuerzas del ejército para asegurar el comercio interestadual. Honestamente, debo decir que la posición del presidente fué ratificada por la Suprema Corte, precisamente en atención a la consideración de que el ejército nacional había ido simplemente a asegurar la ejecución de un servicio federal. Pero el mismo autor previene: «En caso de violencia doméstica dentro de un Estado dirigida contra sus leyes y su gobierno, el ejército federal puede acudir en ayuda sólo cuando sea llamado por las autoridades del Estado». Es decir, que estamos muy lejos de esa intervención permanente que se quiere crear en el despacho de la comisión.

Por las razones tan brillantemente expuestas por el señor diputado Ravignani, voy a votar en contra del artículo 3º *in limine*. Su rechazo no perjudicará la armonía de la ley ni alterará el régimen actual.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

Cuando alguien le preguntó al señor ministro qué se entendía por autoridades federales, dijo claramente: los jueces federales. Y eso sí podría votarse; pero es inoficioso, porque esta función de los jueces federales ya les viene del artículo 13 de la ley número 48. Y observen ahora algunos señores diputados de la Concordancia, cuán distinto fué el modo de apreciación del gobernador de Buenos Aires con motivo de la intervención del señor juez federal, doctor Medina.

Es sabido que el doctor Medina recabó directamente fuerzas de la prefectura, basándose para ello, en el artículo 3º, inciso 9º, de la ley número 3.445, y con esas fuerzas allanó la policía de Quilmes y algunos otros lugares.

Pues bien, esto que era simplemente el ejercicio de una función del juez federal, fué discutido enérgicamente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que parece que no hacía ese abandono en que están incurriendo muchos señores diputados de la derecha.

El considerando primero del fallo de la mayoría de la Cámara Federal de La Plata, del 17 de diciembre de 1935, se refiere a esta oposición, al decir: «Que el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, por nota que corre a fojas 1, y a efecto de que ejercitara su función de superintendencia, se dirigió a la Suprema Corte Nacional, denunciando que el señor juez federal de La Plata con motivo de un proceso por infracción a la ley número 11.386, ha efectuado varios allanamientos valiéndose de la policía fluvial», etcétera.

Ya ven los señores diputados cómo la mera ejecución de una función asignada expresamente por el artículo 13 de la ley número 48, y por el artículo 3º, inciso 9º, de la ley número 3.445, provoca la reacción de los gobernadores de la provincia. ¿Qué será, entonces, cuando entremos a ejecutar este inciso b), del artículo 3º, que, vuelto a repetirlo, es una intervención permanente fuera de nuestro régimen institucional, en cualquier parte de la Nación, cuando dice: «siempre que sean requeridas para auxiliar a las autoridades federales en el ejercicio de sus funciones», como dice el despacho?

Si esto se entendiera como lo dice el señor ministro del Interior, no habría observación; estaríamos con el derecho actual. Pero como ya sabemos que la comisión no va a aceptar modificaciones y como esta comisión procede

en una forma un poco original, porque sus opiniones expuestas por el miembro informante las desautoriza ella misma en la forma de votar, vamos a llegar, sin duda, a situaciones que serán molestas para esa armonía del Estado nacional y del Estado provincial que nos interesa a todos no perturbar.

**Sr. Cooke.** — Le recuerdo al señor diputado, ya que ha hecho mención de un antecedente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que cuando la Junta Escrutadora Nacional solicitó fuerzas del ejército de la Nación para custodiar las urnas en el local de la Legislatura de la provincia, el gobernador, públicamente, por órgano del Ministerio de Gobierno, consideró que eso menoscababa la autonomía de la provincia. Y se trataba precisamente de la justicia federal y del ejército de la Nación, no de una fuerza policial. De donde se deduce que el gobernador tiene mayor celo en defender la autonomía que los diputados de la provincia.

**Sr. Osorio.** — No se trataba de la justicia federal en su organización, sino de la junta electoral que no se compone solamente de jueces federales. Se trataba de una función política, reclamada por un partido político.

En ese caso aparecerían los señores diputados en la contradicción de que considerando conveniente y necesaria la intervención del ejército para custodiar las urnas —sin pensar en ese entonces que el gobernador era el agente natural del gobierno de la Nación— sientan ahora menoscabada la autonomía de la provincia. De manera que contradicción por contradicción, es más grave la de los señores diputados.

**Sr. Anastasi.** — En substancia, este artículo está absolutamente de más. Nos basta con el régimen actual.

Ya sabemos, pues, que los jueces federales pueden proceder como procedió muy bien, dentro de mi criterio, el señor juez federal doctor Medina. Y si ya sabemos eso y si el término «autoridades federales» debe entenderse, como lo ha dicho el señor ministro del Interior «jueces federales», ¿a qué viene este artículo cuya sola lectura va a sugerir dudas a los profesores de derecho que examinan nuestras leyes en algún otro país? Algún profesor, nada menos que chino, examinando nuestra Constitución y nuestras leyes fundamentales, llegó a clasificar a la República Argentina como país unitario. ¿Qué sucedería si otro profesor chino o de cualquier otro país leyera este artículo. (*Risas.*)

**Sr. Osorio.** — Serían pésimos profesores.

**Sr. Anastasi.** — En substancia, ocupando nosotros el lugar ausente de los diputados de las provincias y en homenaje a las provincias, entidades históricas del derecho argentino, vamos a votar categóricamente en contra de este artículo. (*¡Muy bien!*)

**Sr. Pizarro.** — Pido la palabra.

No sé si los argumentos cambian de eficacia y de fuerza a medida que transcurre el tiempo, o si es que la conciencia jurídica de la República ha variado.

Si en los años 1853, 1860 y 1880, se hubiera planteado un problema de esta naturaleza, creo que unánimemente toda la Cámara se hubiera levantado y hubiera dicho: hay que defender las autonomías de las provincias. ¿Por qué? Primero, porque hay que defender las autonomías de las provincias como estados independientes dentro de la República, y segundo, porque hay que defender el texto de la Constitución para que se cumpla fiel y legalmente.

Han pasado los años y la penetración del poder nacional dentro de los estados provinciales ha sido cada vez mayor. Hoy no sé si parece un anacronismo venir a hacer la defensa del federalismo en la Cámara, pero siento que un argumento de esa naturaleza no tiene la eficacia y resonancia que debiera tener en todos los hombres que estamos sentados en este recinto, que no son sólo de la Capital, sino también de las provincias. Y como representante del interior, no lo hago solamente por defender la autonomía provincial, sino porque tengo por la Constitución un profundo respeto y un culto cada vez mayor a medida que más se la desconoce y viola.

El primer argumento que hago al respecto, es el siguiente: no tenemos como Congreso facultad para dictar el artículo en la forma en que está proyectado. No es una opinión mía. Alberdi, en el *Tratado de derecho público provincial*, página 46, nos dice claramente: «Las provincias conservan todos los poderes inherente a la soberanía del pueblo, de su territorio, excepto los poderes delegados al gobierno nacional». Y en otra parte agrega: «El poder federal es exclusivamente limitado a lo que se le ha acordado expresamente por la Constitución». Se compone, por consiguiente, de excepciones. Las excepciones no admiten nunca un criterio interpretativo de ampliación.

Joaquín V. González, en la página 713, nos enumera entre los poderes legislativos exclusivos de las provincias, el ejercicio del poder de policía; González Calderón, en el tomo III, página 442, sostiene lo mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que éstos

no han sido delegados ni restringidos y que la autoridad de un Estado no puede ser limitada por ello (página 483). Arturo Bas, en su *Tratado de Derecho Federal*, tomo I, página 8, concuerda con Estrada, sostiene que los centros seccionales —llama así a los gobiernos de provincia— están llamados a presidir el orden civil y jurídico de sus respectivos territorios y los intereses personales de cada agrupación circumscripita con capacidad de gobierno propio.

Por si esto no fuera suficiente, la Corte Suprema de la Nación uniformemente y sin vacilaciones nos lo dice en reiterados fallos —*Jurisprudencia Argentina*, tomo XXXVII, página 1660— en que se plantea el problema en estos términos: para saber si un poder cualquiera pertenece al gobierno federal, es necesario buscar en la Constitución si le está expresamente conferido. Y yo me pregunto en qué texto de la Constitución se le confiere al poder federal, facultades para crear una policía dentro de los estados federales, o es consecuencia necesaria de un poder determinado. La misma Recopilación nos dice en el tomo XLII, página 641: «Una facultad privativa de las provincias no puede, por ende, ser restringida en manera alguna por el Congreso, quien no puede ampliar por vía de interpretación los poderes que le han sido atribuidos por la Constitución. Si se trata de poderes que por su propia naturaleza o por expresa concesión pertenecen privativamente a las provincias, éstas excluyen igual atribución en el gobierno federal, aunque el último se atribuya un poder general de legislación.»

En el tomo XXV, página 72, dice: «La Nación no puede impedir ni estorbar a los Estados el ejercicio de los poderes de gobierno que no han delegado o que se han reservado, porque por esa vía podría llegarse a anularlos por completo». Y yo me pregunto, señor presidente, qué forma más clara y terminante de anular los poderes de provincias que esta nueva que se introduce en una ley por la cual se pueden provocar conflictos, no hipotéticos, sino reales, entre las autoridades provinciales y las de policía del poder federal.

La Suprema Corte agrega en el fallo citado: «La regla de la autonomía sólo cede ante los poderes delegados al gobierno de la Nación, o en aquellos casos en que la misma Constitución ha convertido el territorio de la Nación, a determinados efectos, en un solo Estado (artículos 7º, 8º e inciso 11 del artículo 67).»

No hay, por consiguiente, un solo antecedente doctrinario o jurisprudencial que pueda fun-

dar la norma jurídica consagrada en el texto de este articulado.

El aspecto de la técnica legislativa, es malo en todo sentido; pero entremos un momento a la política legislativa que puede haber inspirado este artículo. No sé si se quiere con esto excluir de la ingerencia en los negocios políticos a los militares, como se ha dicho en alguna oportunidad por algún representante del Poder Ejecutivo, por cuanto los soldados no tienen más que la contribución de sangre y no la contribución de policía, o bien si se quiere excluir de esa ingerencia a jefes y oficiales para que las pasiones políticas no graviten sobre la organización interna del ejército, o bien si se quiere prescindir de que factores externos que forman la mentalidad de las distintas conscripciones, con que se producen los reclutamientos anuales, puedan dar resultados a veces no apetecidos por el poder central.

Cualesquiera sean los motivos de esta política legislativa, declaro honradamente que con los errores y los aciertos, me quedo siempre con el ejército nacional, vinculado a nuestras contiendas cívicas y a nuestros movimientos políticos, a nuestras glorias y a nuestros desaciertos cualesquiera sean sus resoluciones, y no con un poder de policía esgrimido por un Poder Ejecutivo de la Nación, por acertadas y buenas que sean sus intenciones. En ese sentido hago profesión de fe y declaro que prefiero que esto se convierta en una división de ejército territorial y no en una policía que menoscabe y perturbe el orden establecido por nuestra Constitución.

Voy, pues, a votar, en contra. (*Muy bien! Muy bien!*)

**Sr. Labayen.** — Pido la palabra.

Por cierto que esta cuestión es absolutamente extraña a mis preocupaciones del momento. No pensaba intervenir en el debate y no había hecho un estudio a fondo.

Los profesores de derecho constitucional que acaban de hacer uso de la palabra pueden haber despejado algunas dudas acerca de las facultades de policía de la Nación y de las facultades o poderes de policía de las provincias, sobre lo que debe entenderse por federalismo y por las facultades no delegadas por las provincias. Eso ha sido ampliamente debatido. Pero se ha tocado un sentimiento que es para los hombres de Entre Ríos demasiado caro para que podamos dejarlo pasar sin expresar las razones que tenemos para votar favorablemente el artículo del despacho de la comisión,



sin entender que ese artículo roce el sentimiento de la autonomía provincial, y repito el sentimiento porque para los hombres de Entre Ríos la autonomía es, más que una convicción, un sentimiento y una pasión.

Pero se dice que esta policía será permanente y ejercida por el poder federal en todo el territorio de la República. Yo no lo entiendo así; y si así lo entendiera, no le prestaría mi apoyo. Se trata de una función subsidiaria que tendrá agregada a la función permanente de policía en los territorios de la Nación, una facultad subsidiaria que podrá ser ejercida por el poder federal en el territorio de las provincias, no cuando se le antoje caprichosamente, sino a requerimiento de los jueces federales, circunscripta ya. Así lo entendí siempre, de acuerdo con las palabras del señor ministro.

**Sr. Ravignani.** — No dice eso el artículo.

**Sr. Labayen.** — Pero el señor ministro ha aclarado, y yo me he dado por satisfecho y con ese contenido voy a votar la disposición.

**Sr. Anastasi.** — ¿Nos acompañaría a votar la substitución de «autoridad federal» por «juez federal»?

**Sr. Labayen.** — Yo lo acompañaría en cualquier modificación de forma, porque sé que esta ley adolece de fundamentales defectos de forma.

**Sr. Anastasi.** — Tomo nota de la adhesión del señor diputado para tenerla en cuenta en el momento de la votación.

**Sr. Labayen.** — Le voy a significar al señor diputado por la Capital, que ha querido erigirse en defensor de las autonomías provinciales, que nosotros, los provincianos, los que sentimos la autonomía, no participamos de la opinión del señor diputado cuando dice que el juez Medina obró ajustándose a la ley cuando empleó las fuerzas federales de la policía marítima para realizar un acto judicial porque así le pareció que estaba mejor garantizado; yo sostengo que ese juez no pudo emplear esa policía sin haber antes requerido el auxilio de la policía provincial, y solamente cuando no se le hubiera prestado...

**Sr. Allperín.** — Es el argumento del señor diputado Ravignani.

**Sr. Ravignani.** — La ley no dice eso.

**Sr. Labayen.** — Sostengo eso, interpretando la Constitución y, sobre todo, interpretando el sentido de las autonomías provinciales. De manera que ya ve el señor diputado por la Capital que no se puede erigir en defensor de las autonomías provinciales, suplantando el silencio o la ausencia de algunos representan-

tes de provincia que no ocupan en este momento sus bancas en el recinto. Aquí estamos los hombres de provincia celosos de nuestra autonomía, y la vamos a defender con la mayor pasión cuando sentimos que ha sido rozada.

**Sr. Ravignani.** — Este es el momento.

**Sr. Labayen.** — Lo estoy expresando, que este es el momento.

No creo que el poder federal, que tiene el freno de la Corte Suprema de la Nación si se excede en la interpretación de esta ley...

**Sr. Ravignani.** — O no.

**Sr. Labayen.** — Tengo una fe sin límites en la Corte Suprema, porque en ella se fundamenta el orden jurídico de la República.

Yo contemplo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional pudiera actuar aún sin requerimiento de las autoridades federales. Y me voy a trasladar a épocas pretéritas en lugar de referirme al futuro, pues no soy capaz de inferir al Poder Ejecutivo actual el agravio de suponerle capaz de proceder de torcida manera o de servir intereses políticos menguados.

**Sr. Ravignani.** — Nadie ha dicho eso.

**Sr. Labayen.** — Yo lo digo.

**Sr. Guillot.** — Las leyes no se hacen para el Poder Ejecutivo.

**Sr. Labayen.** — A través de las palabras hay que descubrir intenciones.

**Sr. Ravignani.** — No hay intención ninguna.

**Sr. Labayen.** — Hablo de lo que puede suceder en el futuro, como ha dicho el señor diputado.

**Sr. Ravignani.** — Es cierto. Dije eso.

**Sr. Labayen.** — No sabemos si los hombres que vendrán en el futuro se ajustarán a la misma interpretación de las autoridades actuales ni si tendrán el mismo espíritu.

**Sr. Ravignani.** — No siempre hay virtud política.

**Sr. Labayen.** — De acuerdo. No siempre hay virtud política. Pero yo conservo la ilusión de que mi país estará permanentemente bien gobernado y que si alguna vez no lo estuviera, la República sabrá exigir, por cualquiera de los medios que tienen a su alcance los pueblos libres, el cumplimiento estricto de sus deberes, como ya lo ha probado.

De manera que esta ley no se dicta para que sea interpretada caprichosamente, sino como debe, y las provincias no van a tolerar al poder federal que se meta en sus territorios a ejercer el poder de policía cuando no deba, porque ya le van a plantear la cuestión por la vía judicial y hasta por la vía de hecho. En Entre Ríos no podría caprichosamente ir el

poder federal a ejercer policía porque se le antoje, en contra de disposiciones expresas de la Constitución provincial, que ha legislado sus facultades reservadas, porque encontraría, para defender a esa Constitución de la provincia y los derechos de policía de la provincia, no sólo a los partidos del gobierno, sino a todos los partidos de oposición cuando se extralimitara en sus facultades constitucionales.

A mí, pues, no me asusta esa disposición. Podría cambiarse la forma, pero creo que ha sido delimitado el alcance en el transcurso del debate, y que se ha establecido perfectamente esto: que será requerido el auxilio de esta policía al Poder Ejecutivo de la Nación por los jueces federales...

**Sr. Ravignani.** — No, señor diputado.

**Sr. Labayen.** — ...y no por otro funcionario del Estado. En ese concepto voto la disposición.

**Sr. Ravignani.** — Póngalo en la ley.

**Sr. Labayen.** — Así la interpreto yo y con buena intención la debe interpretar así también el país, y oportunamente los jueces.

**Sr. Anastasi.** — No estando en la ley no obliga a los jueces.

**Sr. Labayen.** — En nuestro país los jueces saben leer bien e interpretar perfectamente las intenciones del legislador.

**Sr. Ravignani.** — Pero no se puede leer en una ley lo que no está escrito en ella.

**Sr. Labayen.** — Yo no soy juez y sin embargo lo interpreto bien.

**Sr. Osorio.** — Yo desearía que el señor diputado Ravignani nos dijese qué entiende por autoridades federales que puedan requerir el auxilio de la fuerza pública.

**Sr. Ravignani.** — Un rector de universidad, un jefe de Correos...

**Sr. Osorio.** — No la puede requerir, porque no tiene imperio, no tiene fuerza. Un rector de universidad no puede requerir esa fuerza.

**Sr. Ravignani.** — Un rector de universidad puede hacer uso de la fuerza.

**Sr. Labayen.** — No se pueden crear hipotéticamente, ilusoriamente, facultades a ciertos funcionarios para poder requerir el ejercicio y el amparo de la policía. ¿Cómo va a requerir un rector de una universidad la policía?...

**Sr. Ravignani.** — Han habido cien casos.

**Sr. Labayen.** — Requerirá el concurso de los jueces federales para que lo amparen y los jueces federales son los que requerirán el auxilio de la fuerza federal, si las fuerzas provinciales no se la prestaran.

**Sr. Ravignani.** — Hay cien casos en que no intervino el juez federal.

**Sr. Labayen.** — Para mí, como diputado y hombre de provincia, esta creación de la policía federal con facultades de extenderse, a requerimiento de los jueces federales, al territorio de las provincias, es un resguardo más para la autonomía de las provincias, para poder evitar hasta la intervención federal por determinados hechos que podrían ser solucionados dando autoridad a los jueces para que puedan ejercer su imperio.

**Sr. Anastasi.** — ¿Tienen o no, actualmente, esa autoridad los jueces federales?

**Sr. Labayen.** — El señor diputado ha dicho que la tienen y yo digo que sí. Ahí está el ejemplo del juez Medina, de la provincia de Buenos Aires, quien interpretando debidamente el texto legal, requirió sin previo aviso al gobierno de la provincia, el auxilio de la fuerza pública.

**Sr. Anastasi.** — No lo digo yo, señor diputado; es el artículo 13 de la ley número 48.

**Sr. Labayen.** — Pero yo digo al señor diputado que es mejor que el poder federal sepa con qué policía podrá auxiliar a los jueces y no que éstos estén haciendo lo que les parezca o les venga mejor; y siempre será mejor la policía organizada militarmente, como lo estará la gendarmería para auxiliar a los jueces en estos casos; que la policía marítima ya sabemos cómo se organiza y cómo se maneja.

**Sr. Eyto.** — Ha dicho el señor ministro que en el territorio nacional.

**Sr. Labayen.** — Ahí se ejerce permanentemente. Ha sido creada exclusivamente para los territorios nacionales, pero se le autoriza al Poder Ejecutivo de la Nación para emplear esa policía, y no otra, para auxiliar a los jueces federales en territorio nacional cuando pidan el auxilio de la fuerza pública, negada por los gobiernos de provincia.

He querido determinar el alcance de mi voto que no es otro que éste que le he dado. (*Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Anastasi.** — Desearía formular una pregunta al señor miembro informante de la comisión: si acepta la substitución, apoyada por el señor diputado por Entre Ríos, de las palabras «autoridades federales» por «jueces federales».

**Sr. Osorio.** — ¿Y cuáles son las autoridades federales que pueden requerir las fuerzas?

**Sr. Anastasi.** — Me interesa la opinión del señor miembro informante.

**Sr. Osorio.** — A mí me interesa la opinión del señor diputado respecto de cuáles son las autoridades que pueden requerir el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir una resolución.

**Sr. Anastasi.** — Ya lo ha explicado el señor diputado Ravignani y no hay necesidad de insistir.

**Sr. Presidente** (Kaiser). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Anastasi.** — He formulado una pregunta.

**Sr. Presidente** (Kaiser). — El señor diputado no tiene la palabra, sino el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Cooke.** — No he de incurrir, después de las brillantes exposiciones de los señores diputados Ravignani, Anastasi y Pizarro, en la demasía de referirme a lo que debe entenderse por autonomía provincial, por poderes delegados o por poderes de policía, que correspondan a las provincias o a la Nación.

Pero quiero suministrar un antecedente que revela que esta preocupación manifestada en este momento no ha sido solamente actual. Cuando se despachó por la comisión, en 1926, este mismo proyecto, el artículo 3º del despacho decía: «Sus funciones se ejercen a requerimiento de las autoridades federales y en todos los lugares sujetos a la misma jurisdicción, con excepción de los sometidos a la militar».

La comisión suprimió en aquella oportunidad el inciso b) —este inciso tan debatido—, que autoriza a que la gendarmería actúe en cualquier parte de la Nación. Firmaban ese despacho los diputados Jorge Ferri, Alberto Moreno, Alfredo Rodríguez, Juan F. Torrent, Cipriano F. Marcó, Alcides López, A. Echeagaray Frías y Tomás Zurueta. Ya aquella comisión previó los alcances que pudiera tener este artículo.

Estamos legislando no para el gobierno actual sino para el futuro. La ley es ley mientras no se modifique o derogue, y no debemos suponer que estamos legislando para las promesas del actual Poder Ejecutivo sino para los gobiernos que lo sucedan y que puedan no tener el mismo concepto de los gobernantes actuales.

La nuestra es una preocupación seria sobre un punto de derecho público provincial y de derecho constitucional, a cuya dilucidación no han agregado nada, a mi juicio, —y lo digo con toda consideración— las palabras del señor diputado Labayen; porque de ellas resulta que olvida que el acto legislativo es uno y el acto judicial otro. El Congreso dicta la ley, o sea

la regla, la norma para el futuro, que es de carácter general; el Poder Ejecutivo la hace cumplir y, cuando la reglamenta, dicta también una norma que es regla para el futuro; y el Poder Judicial la interpreta, en caso de divergencia, y se refiere al pasado.

El señor diputado Labayen interpreta que un artículo que dice una cosa quiere significar otra, porque le bastan las palabras del señor ministro. Indudablemente es una buena fe muy explicable pero no debe convencernos ni tranquilizarnos como legisladores.

Nada más.

**Sr. Fassi.** — Pido la palabra.

Con respecto a este artículo 3º, debemos considerar, en primer término, si se trata de una disposición constitucional y en segundo lugar, si se trata de una disposición conveniente. Consideraré ambas cuestiones por separado.

Manifiesto, al entrar en la primera cuestión, que lo hago con la lógica excitación que me produce tener que refutar los argumentos pronunciados por el distinguido profesor de derecho público, doctor Ravignani, por cuyos conocimientos en la materia tengo un gran respeto. No pensaba intervenir en este debate, pero lo hago porque en la exposición del señor diputado por la Capital he notado algunas manifestaciones que me parece están en contradicción con el texto constitucional. Dijo el señor diputado por la Capital que este artículo 3º es inconstitucional en sus dos incisos, en el inciso a) y en el inciso b). Me ocuparé del primero porque creo que es ahí donde se demostrará con evidencia que el señor diputado por la Capital no ha expresado el verdadero concepto constitucional con respecto a este punto.

Dice el primer inciso que las funciones de la gendarmería se ejercen en todos los lugares sujetos a jurisdicción federal, con excepción de los sometidos a jurisdicción militar. Y hacía el argumento de que esta ley de gendarmería, para encajarse dentro de los términos constitucionales debía referirse a las facultades conferidas por la Constitución en el artículo 67, inciso 14, en cuanto determina que la legislación especial para la organización, administración y gobierno de los territorios nacionales, corresponde al Congreso. Pero no hay que olvidar que este artículo 67 tiene también un inciso 27, el que dice lo siguiente: «Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional». Si este texto del inciso 27 no existiera,

tendría razón el señor diputado por la Capital, doctor Ravignani, porque frente al artículo 104 de la Constitución nacional, no encontraríamos otra oportunidad para crear una gendarmería o cuerpo de policía que la que se refiere a los territorios nacionales. Pero con el inciso 27 del artículo 67, esa facultad se amplía para la Capital Federal y todos los territorios sometidos a la jurisdicción federal. Quiere decir, en consecuencia, que el inciso a) del artículo 3º del proyecto que estamos estudiando, no invade la órbita provincial, sino que se refiere a territorios que están dentro de la jurisdicción nacional, y en que ésta ejerce en forma exclusiva el poder de policía.

De las mismas argumentaciones hechas en el curso del debate resulta la ratificación de lo que afirmo en este instante, puesto que se ha dicho que los puertos, que son ajenos a la jurisdicción provincial y están fuera de los límites de las provincias tienen una prefectura marítima que no ejerce solamente funciones aduaneras, sino también de policía; y si la policía marítima, actúa dentro de una órbita constitucional, en los puertos, la gendarmería también actuaría en ellos sin contrariar lo dispuesto por la Constitución nacional.

**Sr. Ravignani.** — No lo discuto; pero si me permite. Es un asunto...

**Sr. Fassi.** — Entonces, tenemos, señor presidente, lo siguiente: si no se me discute...

**Sr. Ravignani.** — ... es un asunto que ha hecho que se escriban muchos volúmenes.

**Sr. Fassi.** — ... que en los puertos la gendarmería pudiera tener su función, nos encontramos nosotros con un supuesto que no es el del artículo 67, inciso 14, sino que es ajeno a ese artículo sobre el cual basaba su argumentación el señor diputado.

**Sr. Ravignani.** — Eso lo han delegado las provincias.

**Sr. Fassi.** — Han delegado las provincias todos los poderes que están contenidos en el texto del artículo 67 y, en consecuencia, han delegado los del inciso 27. Con esta característica particular, señor presidente: no es posible que nosotros confundamos a todos los Estados federales, que consideremos que esa forma de gobierno es igual en todos los Estados que la han adoptado. Se cita el argumento del Canadá. Ese argumento no habría sido citado por el diputado que habla, puesto que la organización federal del Canadá es distinta a la de la República Argentina, por cuanto allí los poderes, no enumerados, corresponden a la Nación.

**Sr. Anastasi.** — Pero el federalismo del Canadá es mucho más acentuado que el nuestro.

**Sr. Fassi.** — Es mucho menos acentuado que el nuestro.

**Sr. Anastasi.** — ¡No, señor diputado! Ahora, me permite una pregunta...

¿Quisiera saber en qué inciso del artículo 67 está la atribución del Congreso para legislar sobre policía federal?

**Sr. Fassi.** — He dicho que en el inciso 27 del artículo 67 está la facultad de legislar para todos los lugares sujetos a jurisdicción federal.

**Sr. Anastasi.** — ¡Así que las provincias son lugares sujetos a jurisdicción federal!

**Sr. Fassi.** — ¡No, señor diputado! Ya me ocuparé de esa cuestión cuando considere el inciso b) del artículo 3º, por el momento me estoy refiriendo al inciso a) y trato de hacerlo con la mayor claridad.

**Sr. Anastasi.** — Mi pregunta era esta: ¿en qué inciso del artículo 67 coloca el señor diputado o la comisión, la facultad del Congreso para crear la policía federal?

**Sr. Fassi.** — En cuanto a este inciso a), en el inciso 27 del artículo 67 y en cuanto al resto del artículo, tenga el señor diputado un poco de paciencia, que ya me referiré a esa cuestión.

**Sr. Anastasi.** — Esperaremos esa oportunidad, pero hasta leer la disposición constitucional.

**Sr. Fassi.** — Este inciso 27 del artículo 67 no es igual al respectivo artículo de la Constitución de los Estados Unidos. En la Constitución de aquel país, la jurisdicción federal no se ejerce en los demás lugares adquiridos por compra o cesión a cualquiera de las provincias si no hay una cesión expresa de la Legislatura provincial; y esta disposición, como lógica consecuencia, hace que en Estados Unidos sea mucho menor la cantidad de territorios sometidos a la jurisdicción federal, dentro de los límites de las provincias, que en nuestro país en que la Constitución le permite al Congreso establecer la jurisdicción federal mediante una ley.

Ya que se cita con tanto entusiasmo nuestro federalismo, es bueno recordar que la mayor parte de las iniciativas que van federalizando el territorio de las provincias, que van ampliando la órbita de funciones del gobierno federal, no obedece a iniciativas de diputados de la Capital, sino a iniciativa de los mismos diputados de las provincias.

**Sr. Ravignani.** — Todos somos diputados de la Nación aquí.

**Sr. Fassi.** — El argumento que me hace el doctor Ravignani es muy real, sin embargo no

lo ha compartido el señor diputado Anastasi al enunciar la circunstancia particularísima de que sean los diputados por la Capital quienes defiendan el federalismo que deben defender los diputados de las provincias. (*Muy bien!*)

**Sr. Ravignani.** — Nosotros sentimos la Nación Argentina en toda su extensión.

**Sr. Fassi.** — Yo la siento con la misma intensidad, señor diputado.

Posiblemente todas estas iniciativas que llevan la ayuda federal a las provincias obedecen a que ese sentimiento se hace cada vez más intenso. Decía hace un instante un señor diputado que este debate no se hubiera podido producir en el 60, sin que de inmediato se hubiera evidenciado el espíritu federalista de cada diputado; pero es evidente que este debate no se realiza en el mismo ambiente del año 60.

—Suenan la campanilla que anuncia la expiración del término acordado al orador para usar de la palabra.

**Sr. Fassi.** — Quiero manifestar a la Presidencia que hablo en nombre de mi sector.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Entonces, puede continuar, señor diputado.

**Sr. Fassi.** — En el año 60, salíamos recién de la anarquía, estábamos constituyendo la unión nacional, realizando el esfuerzo necesario para que las provincias coincidieran en el propósito superior de la organización del país. Los años transcurridos desde entonces tienen que haber dado mayor cohesión al vínculo que une a los argentinos y es natural, entonces, que no nos detengamos en ciertos reparos cuando encontramos disposiciones constitucionales como la del artículo 67, inciso 16, que le permite al Estado llevar a las provincias su estímulo para la prosperidad general. Estamos en una situación muy diversa a aquella y esto me trae un recuerdo vinculado con la cuestión a que se refiere el artículo 3º, inciso b).

Decía el señor diputado Ravignani que no es posible la intervención policial en las provincias, puesto que la pacificación del país se produjo por la acción policial de esas mismas provincias.

**Sr. Ravignani.** — Se ha llegado ya.

**Sr. Fassi.** — Se ha llegado, pero no por esa única circunstancia, sino en gran parte por la intervención del poder federal. Me bastaría recordar las palabras que pronunció en 1868, el senador Oroño en el Senado de la Nación, en que manifestaba que durante la presidencia del general Mitre se produjeron en el territorio de la República 117 movimientos sediciosos.

**Sr. Ravignani.** — Eso ya lo sabemos: pasó en 1868; ahora en 1938, no.

**Sr. Fassi.** — El señor diputado debe saberlo, por lo mismo que sabe mucho de historia constitucional.

Apreciaré al señor diputado que soy lógico con mi argumentación. ¿Cómo es que no se repite en 1938, esa situación de 1868? No se repite porque el Estado federal adquirió cada vez mayor poder e hizo que abortaran los movimientos sediciosos. Mediante el ejército de aquella época, que era de enganchados, se hizo presente para lograr la pacificación interior.

**Sr. Ravignani.** — ¿Y ahora, en este momento?

**Sr. Fassi.** — Ahora debemos considerar el inciso b), que es el que evidentemente —me apresuro a manifestarlo— ofrece mayores dificultades.

¿Puede en algún momento la gendarmería cumplir sus funciones dentro del territorio de las provincias? Yo entiendo que sí.

Se ha recordado que de conformidad al artículo 13 de la ley 48, los jueces federales pueden acudir a las fuerzas armadas de la Nación para cumplir sus funciones. Este artículo 13 no ha sido declarado inconstitucional. Ese artículo 13 no ha sido tachado de inconstitucional. Y me pregunto si es posible que los jueces federales llamen en su auxilio a fuerzas extrañas a la policía de la provincia. Si en algún caso un juez federal, como se ha citado, ha llamado a los marineros de la Prefectura de La Plata y si ese caso, llevado en apelación a la Cámara Federal no ha sido considerado violatorio de la Constitución, ¿cómo vamos a sostener nosotros que es violatorio de la Constitución que acuda a las fuerzas de gendarmería en un caso similar? O el artículo 13 de la ley 48, es inconstitucional, o en el caso contrario una fuerza organizada que depende del Poder Ejecutivo nacional puede en algún momento estar al servicio de los jueces federales para que éstos cumplan su *imperium* dentro de los límites de las provincias.

**Sr. Anastasi.** — Lo que nosotros sostenemos es que la creación de una policía federal en las provincias es inconstitucional.

**Sr. Fassi.** — Yo estoy perfectamente de acuerdo con el señor diputado y si se hubiera proyectado la creación de una policía federal en las provincias, hubiera sido el primero en oponerme. Pero estoy demostrando cómo es posible que sin crear la policía federal en las provincias, la gendarmería tenga alguna función que desempeñar.

Ahora voy a plantear el supuesto de las intervenciones federales a las provincias, en las cuales es posible que el gobierno federal ponga al servicio de la intervención a las tropas de la gendarmería. Y no creo que exista ninguna disposición constitucional que lo impida.

**Sr. Ravignani.** — Es que en ese caso está allanada la autonomía provincial.

**Sr. Fassi.** — Quiere decir que en ese supuesto es posible que la gendarmería realice su función en cualquier lugar de la Nación. Con lo cual se demuestra que el inciso b) del artículo 3º, es evidentemente constitucional.

**Sr. Ravignani.** — El allanamiento de las autonomías provinciales ya está previsto.

**Sr. Fassi.** — Vemos, pues, cómo a través de las interrupciones se me van haciendo concesiones que demuestran que este artículo es constitucional. Podrá ser inconveniente, pero por el momento no me han demostrado que sea inconstitucional.

**Sr. Ravignani.** — El caso de intervención está fuera de esta ley. Es un caso distinto para el cual se pueden requerir hasta las fuerzas del ejército.

**Sr. Fassi.** — Manifestaba el señor diputado Anastasi la conveniencia de modificar el texto de este artículo, estableciendo en su último apartado «jueces federales» en lugar de «autoridades federales».

Yo haré contra esa modificación dos argumentos: uno vinculado con el propósito de que esta ley obtenga una inmediata sanción, sin tener que volver al Senado de la Nación con modificaciones que no me parecen sustanciales; y en segundo lugar por la circunstancia de que al través de este debate ya ha aparecido una autoridad nacional —el interventor federal— que podría en determinadas circunstancias disponer de estas fuerzas de gendarmería.

**Sr. Ravignani.** — Pero para eso no hay que crear la gendarmería. Ya tenemos el elemento para el *imperium* del interventor federal, que es el ejército de la Nación. Crear para eso la gendarmería me parece un propósito deleznable.

**Sr. Labayen.** — Es un argumento capcioso el del señor diputado.

**Sr. Osorio.** — No se crea para eso.

**Sr. Fassi.** — La gendarmería se crea para los territorios, pero, sin embargo, no se deja de contemplar en la ley la posibilidad de utilizarla con otro objeto si ello resultara útil a los intereses generales de la Nación. (*¡Muy bien!*)

Quiere decir, entonces, que la gendarmería tiene una función eminente y fundamental, que es la policía de los territorios, pero si las necesidades de la Nación lo exigen desempeñará otras funciones aun dentro de los territorios de las provincias.

**Sr. Ravignani.** — Es lo que queríamos demostrar.

**Sr. Anastasi.** — Se crea una policía para todo el territorio de la República.

**Sr. Fassi.** — He indicado los casos en que se puede hacer y no es inconstitucional.

**Sr. Anastasi.** — No se puede hacer y ya le he invitado a que antes de terminar su discurso nos indique qué texto constitucional...

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Le ruego al señor diputado que no interrumpa.

**Sr. Anastasi.** — Es para ayudarlo a terminar.

**Sr. Fassi.** — No necesito que el señor diputado me ayude a terminar. Sé terminar solo. (*Risas.*) Hace tiempo que he dejado de ser su alumno.

**Sr. Anastasi.** — Se desea con esta ley...

**Sr. Fassi.** — Le ruego que no me interrumpa, hasta por esta consideración: porque no he previsto mi intervención en este debate. A pesar de ser una tarea difícil, entiendo que la he llenado cumplidamente y que quedará en el ambiente de la Cámara y del país la certeza de que estamos votando una ley constitucional. (*¡Muy bien!*)

**Sr. Cisneros.** — Es mucho optimismo.

**Sr. Fassi.** — Es un optimismo que posiblemente no compartan los señores diputados, pero es la mía la posición que mejor sirve los intereses de la Nación.

**Sr. Pizarro.** — ¿Me permite?

**Sr. Fassi.** — Discúlpeme el señor diputado. No voy a permitirle porque quiero terminar mi exposición.

Se dice que esta ley estableciendo la gendarmería, con tal amplitud de funciones, se presta a que algunos gobiernos la utilicen para el avasallamiento de las autonomías provinciales. Y se agrega: no la combatimos porque supongamos que el actual Poder Ejecutivo la desvirtúe, sino porque las leyes rigen mientras no se dejen sin efecto y, en consecuencia, esta gendarmería va a quedar a disposición de muchos poderes ejecutivos que tal vez desvirtúen el propósito de su creación.

Señor presidente: Entendemos que para avasallar las autonomías provinciales el Poder Ejecutivo de la Nación no necesita de la gendarmería, porque en la historia del país tenemos intervenciones para todos los supuestos,

aun los más alejados de la Constitución. Si los poderes ejecutivos son respetuosos de la Constitución y de las leyes, la gendarmería no es un peligro; si, por el contrario, no paraniente en avasallar las autonomías provinciales, entonces no necesitan de la gendarmería, como lo demuestra la historia, desde que nos hemos organizado constitucionalmente.

**Sr. Ravignani.** — Nosotros legislamos para poderes ejecutivos respetuosos de la Constitución.

**Sr. Fassi.** — Si los señores diputados legislan para poderes ejecutivos respetuosos de la Constitución, pueden entonces sancionar a ojos cerrados este proyecto.

Sintetizando, creo haber demostrado lo siguiente: que el inciso a) es constitucional, porque la facultad de crear la gendarmería no sólo nace del artículo 67, inciso 14, sino también del inciso 27 del mismo artículo; y que el artículo 3º, inciso b) es constitucional porque las leyes declaradas reiteradamente constitucionales, facultan a los jueces federales para que utilicen fuerzas federales a objeto de cumplir disposiciones que hayan adoptado en virtud de su imperio; y en segundo lugar, porque también debemos encarar el caso, que no es tan raro en nuestro país, de las intervenciones federales.

Entiendo, pues, que argumentando con este criterio podemos sancionar sin modificaciones esta ley, sin perjuicio de que cuando el ejercicio de las funciones de la gendarmería demuestren la inconveniencia de alguna de las disposiciones adoptadas, se proceda a la modificación de la ley. Con este concepto y entendiendo que no me pongo frente a la Constitución, por la que tengo el mayor respeto, votaré este artículo 3º tal cual aparece en el despacho de la comisión. *(Aplausos.)*

**Sr. Anastasi.** — Pido la palabra para una brevísima rectificación.

El señor diputado por la Capital nos ha citado dos incisos del artículo 67 de la Constitución para fundamentar la creación de la policía federal en los territorios nacionales, los incisos 14 y 27. El inciso 14 se refiere a la administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias; y el inciso 27 alude al territorio de la Capital de la Nación y demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias.

Como se ve, ninguno de esos incisos atañe a las provincias, y no creo que el señor diputado sostendrá que las provincias son territo-

rios nacionales o son lugares adquiridos por compra o cesión.

**Sr. Fassi.** — Le voy a citar al señor diputado los artículos 5º y 6º de la Constitución para los casos de intervención.

**Sr. Anastasi.** — Peor; se refiere a la intervención nacional, cuando la soberanía nacional se sustituye a la autonomía provincial.

**Sr. Ravignani.** — El señor diputado acaba de destruir toda su argumentación.

**Sr. Hardoy.** — Pido la palabra.

No pensaba intervenir en este debate, pero la imputación que nos ha sido reiteradamente formulada a los diputados que tenemos el honor de representar en este recinto a la primera provincia argentina, de que no sentimos ni defendemos su autonomía, me obliga a distraer por unos momentos la atención de la Honorable Cámara.

Señalo, ante todo, el notable progreso institucional que está revelando en estos momentos el sector radical, tan preocupado y tan celoso ahora de la defensa de las autonomías provinciales, postura adoptada y conducta que no fué, por cierto, la que mantuvo durante el régimen político del señor Hipólito Irigoyen.

**Sr. Ravignani.** — A mí no me puede imputar semejante cosa el señor diputado.

**Sr. Eyto.** — ¿Quiere entrar el señor diputado al debate político?

**Sr. Hardoy.** — Hago imputaciones impersonales a ese partido que fué solidario con esa política y al cual pertenece el señor diputado.

**Sr. Pizarro.** — Hemos hecho cuestión constitucional solamente.

**Sr. Hardoy.** — Lo que quiero hacer notar es que los señores diputados son ahora celosos de las autonomías provinciales, autonomías que su partido no supo o no quiso defender.

Se está discutiendo reiteradamente desde el comienzo de este ya largo debate en particular, las características, las condiciones, la forma del ejercicio del poder de policía. Dice González Calderón, ya citado, que: «El poder de policía, desde luego, como lo reconocen todos los autores, es un derecho incontrovertible en toda sociedad jurídicamente organizada, esencial a su propia conservación y defensa y pertenece a todo gobierno constituido, sea la Nación o las provincias, para asegurar el logro de los fines sociales, mediante el uso de los medios que a ese efecto sean adecuados. Aunque la autonomía de los Estados o de las provincias es la fuente originaria de ese poder, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, no es discutible que en Estados Unidos de Amé-

rica puedan ejercerlo con más amplitud que en las provincias argentinas, porque además de la referida facultad de dictar los códigos sustantivos, nuestro Congreso ha sido autorizado para proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, etcétera. Artículo 67, inciso 16 de la Constitución nacional.

No se concibe la existencia de un gobierno como entidad jurídica sin que disponga de los medios indispensables para cumplir los fines fundamentales que determinaron su existencia. ¿Cómo podría existir el gobierno federal si la Constitución no hubiera puesto en sus manos el medio para hacer efectivas las declaraciones, atribuciones y facultades que le otorga la misma Constitución nacional?

Es verdad que el artículo 110 de la Constitución nacional constituye a los gobernadores de las provincias en agentes naturales del gobierno federal; pero la simple lectura del precepto constitucional demostrará también que no son los agentes exclusivos de ese poder, y no podrían serlo, porque no es concebible que un poder que debe existir por sí mismo, que no debe precisar de nadie para ejercer la misión fundamental que le está acordada por la Carta Magna, precise recurrir a un poder extraño, como es el del gobernador de una provincia, que tiene otro origen, que emana de otro título y que podrá prestarse o no, sin que existan medios constitucionales para reducirlo. Es tan indiscutible esa atribución, que ha sido reiteradamente ejercida por el Congreso de la Nación, habiéndola votado sin discusión en distintas leyes, en todos los tiempos, que han sido reglamentadas por todos los poderes ejecutivos que se han sucedido desde la organización de nuestro gobierno constitucional.

Lamento no tener a mano en este momento la cita de González Calderón, en que hace una enumeración prolija de todas las leyes, como la de policía sanitaria, como la de concesiones de ferrocarriles a través de territorios de provincia, como otras de ejercicio de facultades constitucionales que implican necesariamente el ejercicio del poder de policía.

El Congreso de Estados Unidos, a pesar de que tiene atribuciones más restringidas que el de nuestro país, ha suprimido loterías, ha prevenido la adulteración de alimentos y de drogas, castigado el ejercicio de la trata de blancas, compelido el uso de dispositivos en los ferrocarriles, ordenado menos horas y mejores condiciones de trabajo en cierta clase de labor. Sería innecesario...

**Sr. Ravignani.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Hardoy.** — Es una cuestión tan evidente en derecho constitucional que me asombra que el señor diputado insista...

**Sr. Ravignani.** — ¿Por qué no cita de González Calderón el tomo III, página 435?

**Sr. Hardoy.** — ... en negar al poder federal el derecho de ejercer un poder de policía.

**Sr. Ravignani.** — ¿Quiere que le cite de González Calderón...?

**Sr. Hardoy.** — Le diré que, en la esfera de sus atribuciones, el poder de policía es indispensable a la existencia de todo poder federal. No puede dejar de decirlo ningún constitucionalista.

**Sr. Ravignani.** — El Congreso puede dictar una ley de trabajo, pero no va a ir la policía federal a las provincias para vigilar el cumplimiento de las horas de trabajo. Están para eso los departamentos del trabajo de las provincias.

**Sr. Hardoy.** — Porque la Constitución nacional ha atribuido expresamente a las provincias la facultad de aplicar las leyes de fondo. Ha sido necesario que se dijera expresamente en una cláusula constitucional; para que esa facultad les estuviera atribuida.

**Sr. Medina.** — Es elemental.

**Sr. Hardoy.** — El proyecto habla de autoridades federales. ¿Qué debe entenderse por autoridad, señor diputado? Autoridad es el representante de un poder que tiene imperio, que actúa por sí mismo, que no depende de nadie sino de sí mismo. Un juez federal representa un poder, encarna la justicia federal de la Nación. Es una autoridad federal y por eso ha dicho con toda razón el señor ministro del Interior, y ha sido reconocido uniformemente por los señores diputados, que pueden ejercer ese poder.

Ese es, pues, el sentido del precepto.

En definitiva esta ley, que tanta discusión y tanto apasionamiento provoca de parte de todos los sectores de la Cámara, no confiere a las autoridades federales nada de que actualmente no dispongan. Las autoridades federales pueden ahora disponer de las fuerzas armadas de la Nación. Podrá hacerse una distinción sutil acerca de la calificación de esta fuerza, pero el hecho cierto, positivo, es que las autoridades federales disponen de fuerzas para cumplir sus fines. No creo que se aumente tan extraordinariamente, hasta convertirse en un peligro público, el poder del Estado federal confiriéndole la modesta facultad de disponer



de estos gendarmes que van a estar alojados en los puntos más extremos del territorio, para actuar en un caso de emergencia excepcional.

Es una facultad previsor y prudente, conferida con un alto sentido práctico al Poder Ejecutivo de la Nación, que es, en última instancia, el encargado de mantener el orden público y de garantizar todos los derechos ciudadanos.

Ya sé que se hará objeción, que en todo caso no sería de carácter fundamental, institucional, sino política, recordando la actitud del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires doctor Fresco, en la incidencia que ha sido mencionada, en que el juez federal Medina reclamó el concurso de las fuerzas armadas de la Nación. Pero, señores diputados, no se trató en ese caso de la aplicación del artículo 110 de la Constitución. Su artículo 43 dice que en caso de vacante —se refiere a la Cámara de Diputados de la Nación— el gobierno de la provincia o de la Capital hace proceder a la elección legal de un nuevo miembro, e implícitamente, entonces, la Constitución confiere al gobernador las facultades necesarias para asegurar el orden público y para que se respeten los derechos cívicos, en perfecta concordancia con la ley de elecciones nacionales.

Me complace destacar el reconocimiento expreso que se ha hecho en la Honorable Cámara, de la preocupación y del celo del gobernador del primer Estado argentino, al defender su autonomía contra posibles avances de cualquier autoridad nacional, aunque ella fuera solidaria con los propósitos y política que inspiran su acción de gobierno.

Creo haber desvirtuado así, brevemente, las imputaciones que se han formulado y haber demostrado plenamente que los diputados por Buenos Aires respetamos la Constitución, aspiramos a que se cumpla en su letra y en su espíritu, y sentimos profundamente el federalismo, como que nos sentimos identificados con los hombres de Buenos Aires que, si han contribuido a hacer la unidad nacional, han sabido también hacer respetar celosamente la autonomía y los derechos de la provincia.

Lamento que mi exposición sea, por los motivos apuntados al principio, un poco desordenada. Pero al señor diputado por la Capital que reclamaba insistentemente la cita de las disposiciones concretas en que se funda este poder de policía...

**Sr. Anastasi.** — No; la creación de la policía federal en las provincias.

**Sr. Hardoy.** — ...yo le diré que lea el inciso 16 del artículo 67, de la Constitución, por el que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país y al adelanto y bienestar de todas las provincias, y el inciso 28, por el que le corresponde hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes...

**Sr. Anastasi.** — Los poderes antecedentes.

**Sr. Hardoy.** — ... y todos los otros concedidos por la Constitución, al gobierno de la Nación.

**Sr. Pizarro.** — Recuerde el señor diputado en qué condiciones se reconocen los poderes implícitos.

**Sr. Hardoy.** — Siempre que sean necesarios para poner en ejercicio todos los otros concedidos por la Constitución, al gobierno de la Nación.

**Sr. Pizarro.** — No basta. Ya ha sido citado el caso de Marshall y lo que ha resuelto uniformemente la jurisprudencia americana sobre lo que es la característica de los poderes implícitos.

**Sr. Hardoy.** — El artículo de nuestra Constitución es perfectamente claro. Y si se reconoce al gobierno nacional el poder de policía indispensable para asegurar su propia existencia, hay que acordarle las facultades y los medios para que ese poder de policía se ejerza en la práctica.

**Sr. Anastasi.** — ¿Para eso necesita la gendarmería?

**Sr. Hardoy.** — Voy a terminar con una cita que en este momento llega a mi memoria, de la Suprema Corte, de Estados Unidos, cuyas decisiones preocupan tanto a los señores diputados del sector radical, a justo título por lo demás, cuando dijo que una Constitución debe ser interpretada con liberales y armónicos lineamientos y debe ser utilizada y aplicada como un instrumento de gobierno para el pleno logro de sus fines.

**Sr. Ravignani.** — Pero no violadas.

**Sr. Hardoy.** — Sería hacer una construcción puramente teórica, algo así como una declaración para juristas, para que se archivara en los anaqueles de la biblioteca y no para que se aplicara como una cosa viva que deba servir para estimular el progreso y para garantizar los derechos, una Constitución que creara un gobierno que no estuviera provisto de los medios indispensables para su ejercicio.

Lamento haber sido, tal vez, un poco vehementemente en mi exposición; pero los hombres de Buenos Aires amamos profundamente nuestra

provincia y reclamamos como un título de honor el ser reconocidos como los más celosos defensores de su autonomía. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Reyna.** — Pido la palabra.

Debo declarar por anticipado que coincido en un todo con los conceptos vertidos por mi colega, el señor diputado por la Capital, doctor Fassi. Pero algunas palabras vertidas por el señor diputado Anastasi, por quien siento un alto respeto, obligan a una aclaración que ha de ser muy breve, porque tengo el sentido de lo que impone la discreción a esta altura del debate.

No están vacías las bancas de los diputados por las provincias, que vamos a votar el artículo 3º y que no hemos abdicado el derecho de defender las autonomías provinciales ni creemos estar en contradicción con nuestras convicciones federalistas. Tengo un alto respeto por mi distinguido colega de la Comisión de Negocios Constitucionales, doctor Ravignani, como asimismo, por el señor diputado Cooke, pero no coincido con ellos respecto a que el artículo 3º del proyecto que debatimos sea inconstitucional. El inciso a), del artículo 3º, señor presidente, establece «en todos los lugares sujetos a jurisdicción federal», y no puede interpretarse de otro modo, como lo expresan los profesores de derecho constitucional, que la condición específica de la jurisdicción está en el Poder Judicial. De manera que esa disposición del artículo 3º del proyecto, se refiere únicamente a los casos en que fuera solicitada por la justicia federal.

Por otra parte, no hay necesidad de modificar esa parte, como lo proponía un señor diputado, estableciendo que será a requerimiento de los jueces federales. Los que han estudiado nuestra Constitución, saben que el artículo 31 de nuestra Carta Fundamental, que fué tomada de la Constitución norteamericana y que crea la jurisdicción extraordinaria de la Suprema Corte nacional, y la ley número 48, a que se ha referido el señor diputado, dicen: «y las autoridades de provincia», a diferencia de lo que expresa la disposición similar de la Constitución norteamericana, que habla de «los jueces de los Estados». Todos los autores de derecho constitucional han entendido que las autoridades de provincia, tal como están establecidas en el artículo 31 citado, se refieren a los jueces federales de las provincias o a los jueces ordinarios. Nadie ha pretendido que esas autoridades de provincias fueran otras que los jueces nacionales o provinciales.

Por eso vamos a votar este proyecto, entendiendo que no afecta a las autonomías provinciales y que el inciso b), —que, como decía el señor diputado Fassi, es el más vulnerable a la discusión—, deba entenderse por extensión en el mismo sentido que el inciso a), y que cuando las autoridades federales reclamen la fuerza de la gendarmería militarizada, no podrán ser otras que las autoridades jurisdiccionales, que son los jueces federales.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Susan.** — Pido la palabra.

La mayoría de la Comisión de Guerra y Marina, como se puede presumir, mantiene el texto íntegro del artículo.

Pero por las mismas razones que he expresado anteriormente, con motivo del agregado propuesto por el señor diputado Repetto, el diputado Castex y el que habla, personalmente van a adherirse a la proposición formulada por el señor diputado Ravignani, en forma tan brillante, en nuestro concepto. Así lo hemos expresado en la comisión; hemos dicho que no seríamos impermeables a cualquier razonamiento, a nuestro juicio, fundamental, que se hiciese en el recinto.

De manera que el diputado Castex y el que habla, apoyamos la referida proposición.

**Sr. Ravignani.** — Pido la palabra.

En realidad muy pocas tengo que agregar, porque con las interrupciones he aclarado mi pensamiento.

Pero cuando se lea desapasionadamente el debate, se verá con toda claridad que al discutirse este artículo 3º se ha olvidado un tanto la finalidad exclusiva de la ley, que es la gendarmería para los territorios nacionales, hablandose en cambio hasta del empleo de las milicias en caso de necesidad de una intervención federal.

Hasta hoy, después de centenares de intervenciones ejercitadas por el gobierno de la Nación, en ningún momento éste ha necesitado de otro elemento, para ejercer su autoridad, que el que le da la Constitución.

De manera que esta gendarmería no se ha creado para llenar ese vacío. Pero los señores diputados que han pretendido contestarme, no han podido escapar al asunto y han sido llevados por el plano inclinado de establecer con claridad que el gobierno de la Nación puede usar estas milicias para apoyar mañana una intervención federal.

Considero que ese no es el propósito de la ley y precisamente para concluir con ese peligro y que deseamos evitar, queremos crear

estas milicias única y exclusivamente para los territorios nacionales.

Además, señor presidente, aquí se ha hablado mucho de doctrinas y de teorías. No he hecho ningún debate porque no quiero hacerlo. Me limito a establecer mi punto de vista para que mañana, en la práctica, los jueces y las autoridades enunciadas en la Constitución o las delegadas por los poderes constituídos por la Constitución —porque hay autoridades delegadas hasta como jueces de faltas—, no queden librados a las posibles interpretaciones. Las interpretaciones de la mente humana son muy variadas. Aquí se ha citado doctrina de autores pretendiendo hacerlos aparecer como probables defensores de la tesis de que el gobierno de la Nación puede ejercer acción policial en todos los ámbitos de la Nación. No, señor presidente. Ni por la estructura de la Constitución ni por la doctrina sustentada por los autores, como González Calderón, que es federalista y a quien hay que leer en la totalidad de la obra y no en una cita trunca, puede sostenerse el principio que se introduce por el artículo 3º de este proyecto. González Calderón dice bien claro en su tomo III, página 435, después de ocuparse del comentario del último capítulo de la Constitución, en un todo orgánico, y de informarse en la jurisprudencia norteamericana y en la doctrina de los autores de todo momento, lo siguiente: «Las provincias son las unidades orgánicas e indestructibles con poderes inherentes que componen la Nación —lo dice el Preámbulo— con capacidad absoluta para gobernarse según la forma establecida por sí mismas dentro de las condiciones fundamentales determinadas en la Constitución nacional», artículo 5º, —señor diputado Fassi— «y con todo el poder que no han delegado al gobierno de la Nación», artículo 104, —señor diputado por Buenos Aires—. «Esta definición surge evidentemente del Preámbulo de la Constitución y de los citados artículos 5º y 104, cuyo sentido histórico y jurídico es el mismo de la enmienda X, de la Constitución de Estados Unidos, como el mismo Estrada lo reconoce».

**Sr. Hardoy.** — Es bien sabido que en materia constitucional somos federalistas pero la acción, la influencia del gobierno nacional se ejerce sobre el territorio de todas las provincias. Sólo que ello se hace con otros fines y propósitos.

Por eso, la Constitución nacional separa los poderes atribuidos a unos y otros. No se trata de entidades soberanas...

**Sr. Ravignani.** — Autonómicas. Hay tres categorías: autonomías provinciales con facultades no delegadas, concurrentes y exclusivas de la Nación pero delegadas por la Constitución a esta última. No se puede salir de ahí. Lo demás es interpretación equivocada. Sostengo que las funciones de policía, dentro de la provincia, aun en representación de autoridades nacionales, deben ser requeridas por la autoridad nacional como simple función de policía, por el gobierno de la Nación a las policías provinciales.

**Sr. Hardoy.** — Desearía hacer una aclaración.

**Sr. Presidente (Kaiser).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Fassi.** — Voy a decir pocas palabras.

Cuando cité el caso de la intervención nacional a la provincia, no lo hice con el propósito de darle una mayor amplitud a las funciones de la gendarmería, puesto que no deseo que tenga tales atribuciones, sino simplemente como un argumento para demostrar cómo, dentro del texto de la Constitución, era posible que la gendarmería tuviera funciones que desempeñar dentro del territorio de las provincias.

Quería expresar este concepto con claridad para que no se desvirtúe el propósito de mi argumentación.

**Sr. Hardoy.** — Iba a hacer la misma aclaración que surge de las palabras del señor diputado y precisar el concepto o, por lo menos, la diferencia de estructura. Quería establecer que el señor diputado por una parte ha admitido que el gobierno nacional ejerce sus funciones en todo el territorio de la Nación.

**Sr. Ravignani.** — No me fragmente el pensamiento, señor diputado.

**Sr. Hardoy.** — Eso va también por cuenta suya y mía, señor diputado. Lo que el señor diputado no acepta es que el gobierno nacional pueda valerse de sí mismo para poner en ejercicio esos poderes. El señor diputado entiende que únicamente los gobiernos de provincia pueden poner en ejercicio los poderes de la Nación. Por mi parte, entiendo que el gobierno de la Nación puede ponerlo en ejercicio por sí mismo y que los gobiernos de las provincias pueden y deben y tienen esa atribución por sí mismos sin necesidad de recurrir a la autoridad federal en la esfera de su capacidad constitucional.

**Sr. Pastor.** — Pido la palabra.

No sé si he oído mal; pero las últimas palabras del señor miembro informante de la comisión anunciaban que con otro miembro de

la comisión, con el señor diputado Castex, habían cambiado de opinión en este asunto y estaban dispuestos a suscribir la proposición del señor diputado Ravignani.

**Sr. Susan.** — Así es, señor diputado.

**Sr. Pastor.** — Este cambio de posición de dos miembros de la comisión, me obliga en forma sintética y breve a aclarar el concepto general con que el bloque demócrata nacional va a permanecer firme en su posición de sostener el despacho de la comisión.

Se ha exteriorizado un exceso de alarma de parte de los señores diputados impugnantes respecto al alcance de esta ley y la lesión que ella podría producir al concepto autonómico de las provincias; y no sólo al concepto autonómico de las provincias sino al sentimiento autonómico de los diputados que nos sentamos en estas bancas representando a las provincias, y que apareceríamos en una situación de claudicación. Quiero expresar a la Honorable Cámara que vamos a votar esta ley tal cual ha salido de la Comisión de Guerra y Marina con un concepto claro de nuestros sentimientos y de nuestra responsabilidad como diputados que representamos en cierta forma el sentimiento autonómico de las provincias en el Congreso de la Nación.

La vamos a votar respaldándonos en los antecedentes jurídicos de la Nación, invocando todas aquellas leyes que la Nación ha sancionado, llevando la acción del poder federal a las provincias, especialmente en el régimen impositivo, cuyas leyes en su época fueron discutidas con un poco de apasionamiento y con un gran sentimiento de defensa de las autonomías de las provincias; pero que la vida política de la Nación y los acontecimientos económicos de la República han demostrado que aquellas inquietudes fueron sólo pasajeras y que no tuvieron ningún fundamento. Tal ocurría con la ley de impuestos internos que se ejecuta, se realiza y se hace efectiva en todo el territorio de la República por medio de agentes del poder federal y que cuando alguien viola las disposiciones de esa ley, antes que los jueces jurisdiccionales de las provincias conozcan de los delitos cometidos al margen de esa ley, el propio poder federal a concurrido a resguardar la función y autoridad de sus empleados en las provincias.

Vamos a votar esta ley respaldándonos en acontecimientos conocidos por todos los señores diputados, en acontecimientos que representan la acción de los jueces federales cuando no han contado con el apoyo de las policías de las provincias para hacer cumplir sus decisiones y han

recurrido directamente, sin llegar hasta el Poder Ejecutivo de la Nación, al apoyo de las fuerzas nacionales para hacer cumplir sus decisiones sin que por eso se hiciera lesión alguna al gobierno autónomo de una provincia. Y no puede ser de otra manera, cuando tenemos en el país el espectáculo de partidos de la oposición que recurren al Poder Ejecutivo de la Nación para la custodia de las urnas y vigilancia de los actos electorales que por imperio de la ley y del régimen federal de nuestro país debe estar siempre bajo la custodia y el honor de los gobiernos de las provincias. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Nosotros entendemos que las leyes que dicta el Congreso para crear nuevos organismos, para poner en ejercicio facultades y poderes del gobierno central, no pueden ser votadas en el Congreso de la Nación Argentina, donde siempre ha dominado un puro sentimiento de federalismo, no pueden ser votadas por ninguno de los diputados que se sientan en estas bancas con el concepto de imprecisión o indecisión que significaría dar un voto que representara una sanción contraria a ese espíritu federalista dominante en nuestro país.

Vamos a votarla con un concepto nuevo, con el concepto de que sancionamos un instrumento legal que ponemos en manos del Poder Ejecutivo de la Nación para que cree un nuevo organismo destinado a resguardar los intereses, la vida y los bienes de todos los habitantes de la República, especialmente de los territorios nacionales. Creemos que esta ley no puede ser considerada, como no lo ha sido ninguna sanción de este Congreso, un dechado de perfección, que no es inatacable en absoluto en todas sus disposiciones y en toda su estructura jurídica, pero creemos que una vez que esta ley haya sido sancionada y que el Poder Ejecutivo haya organizado la gendarmería y la haya mandado a los territorios, si ese Poder Ejecutivo tropieza con algunas dificultades que surjan de la aplicación de la ley, ese Poder Ejecutivo en un gesto patriótico, sería el primero en pedir la reforma de las disposiciones que no estuvieran de acuerdo con los propósitos esenciales que inspiraron su creación.

Creemos más, señor presidente, creemos que no sólo ahora, sino en todo momento, en esta Cámara se han de sentar diputados vigilantes de las facultades del Congreso, vigilantes del federalismo y de las necesidades del país y animados por las inquietudes que provoca siempre en el espíritu de todo argentino los problemas de su Nación, que frente a los defectos o a las deficiencias de la ley o de las desviaciones

en su aplicación, han de traer a esta Cámara, como fruto de esas inquietudes, el proyecto de reformas necesarias a la ley. (*¡Muy bien!*)

No se ha olvidado, señor diputado Ravignani, como decía hace un momento, la finalidad esencial de la ley; ella no puede olvidarse a través de una discusión de una sesión de la Cámara. Sería ésta una imputación demasiado grave y demasiado seria para el concepto de los diputados que votamos iniciativas en este recinto y que se les atribuya que al considerar una iniciativa olvidan el objeto fundamental de la misma.

No, señor diputado; tenemos un concepto y es el que acabo de expresar, tenemos el concepto esencial de que votamos una ley que es necesaria, que es útil y que es perfectamente apropiada a los fines esenciales que se persiguen al sancionarla.

Con estos conceptos, el bloque demócrata nacional mantiene su posición de votar el despacho de la comisión, sin aceptar las modificaciones que han sido propuestas. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Kaiser). — Se va a votar el artículo 3º del despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa de 54 votos. Votan 83 señores diputados.

—Sin observación, se aprueban los artículos 4º y 5º.

—En discusión el artículo 6º.

**Sr. Cooke.** — Pido la palabra.

Voy a proponer la supresión de la primera parte del artículo 6º, y expresaré las razones que motivan el pedido.

**Sr. Pastor.** — Si me permite el señor diputado, voy a hacer una moción de orden: que cuando termine su exposición el señor diputado, se pase a cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.

**Sr. Pandolfo.** — Podemos terminar hoy.

**Sr. Presidente** (Kaiser). — Está en consideración la moción del señor diputado por San Luis.

**Sr. Ghioldi.** — Propongo que la Cámara realice una sesión el martes próximo para tra-

tar los asuntos ordinarios, y que el día miércoles se considere esta orden del día.

**Sr. Pastor.** — Acepto la proposición del señor diputado.

**Sr. Ruggieri.** — Pido la palabra, para modificar en parte la indicación del señor diputado por San Luis, en el sentido de que pasemos a cuarto intermedio desde ahora.

**Sr. Presidente** (Kaiser). — Hay dos proposiciones.

**Sr. Ruggieri.** — Yo pediría al señor diputado por San Luis aceptara mi proposición...

**Sr. Ghioldi.** — Hay una sola moción.

**Sr. Pandolfo.** — ¿Cuál es la moción del señor diputado Ghioldi?

**Sr. Presidente** (Kaiser). — El señor diputado Ghioldi propone que la Cámara se reúna el martes próximo para tratar los asuntos entrados y que el miércoles se considere el despacho sobre gendarmería, con exclusión de todo otro asunto.

**Sr. Pandolfo.** — Yo le pediría al señor diputado Ghioldi que aceptara una modificación, en el sentido de que el martes se dé entrada a los asuntos y si hay tiempo, sigamos con el despacho sobre gendarmería, a fin de cumplir con el orden de trabajo establecido por la Cámara.

**Sr. Presidente** (Kaiser). — Se va a votar la indicación propuesta.

—Se llama para votar.

**Sr. Mugica.** — ¿Qué es lo que se va a votar?

**Sr. Presidente** (Kaiser). — La Presidencia previene que no se va a poder votar nada, porque se están retirando los señores diputados.

**Sr. Guglielmelli.** — ¿Hay número en la casa?

**Sr. Presidente** (Kaiser). — En la casa sí, pero en el recinto no.

—Después de unos momentos de espera:

**Sr. Presidente** (Kaiser). — En este momento no hay número en la casa. Queda levantada la sesión.

—Era la hora 22 y 53.